

6363



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

**ESTUDIO
PLAN DE PROMOCION AGROPECUARIA
1ª ETAPA**

PROVINCIA DE CORRIENTES

ASPECTOS INSTITUCIONALES Y LEGALES

CONSULTOR: DR. EDUARDO A. PIGRETTI

ESTUDIO

PLAN DE PROMOCION AGROPECUARIA

1a. ETAPA

S U M A R I O

1. INTRODUCCION

2. ASPECTO CLIMATICO E HIDRICO

2.0 CONSIDERACIONES GENERALES

2.1 LA CLIMATOLOGIA. SU RELACION CON LA EVALUACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS Y SU APROVECHAMIENTO, ESPECIALMENTE, EL AGROPECUARIO.

2.1.1 Introducci3n

2.1.1.1 L3mites de la regi3n y caracter3sticas geogr3ficas.

2.1.2 R3gimen t3rmico

2.1.2.1 Temperaturas medias

2.1.2.2 Temperaturas m3ximas y m3nimas medias

2.1.2.3 Temperaturas m3ximas y m3nimas absolutas

2.1.2.4 Frecuencia de las temperaturas absolutas

2.1.2.5 Temperaturas estacionales

2.1.2.6 Promedios horarios de la temperatura del aire

2.1.2.7 Temperatura relativa

2.1.2.8 R3gimen de heladas

2.1.2.9 Grado de continentalidad.

2.1.3 Humedad Atmosf3rica

2.1.3.1 Marcha anual de la evaporaci3n f3sica

2.1.3.2 Indice clim3tico de evaporaci3n. M3todo de D. Szymkiewicz.

2.1.3.3 Humedad del aire

2.1.3.3.1 Tensi3n del vapor de agua

2.1.3.3.2 Humedad relativa

2.1.3.4 Grados de humedad

2.1.3.5 Frecuencia de d3as con niebla.

2.1.4 R3gimen pluviom3trico

2.1.4.1 Valores medios mensuales y anuales (1921/1955).

2.1.4.2 Marcha anual de la lluvia

2.1.4.3 Variabilidad de la lluvia.

2.1.4.4 Variaci3n de la precipitaci3n a trav3s del tiempo

2.1.4.4.1 Tendencia secular

2.1.4.4.2 Tendencia temporaria

2.1.4.5 Frecuencia de totales anuales de lluvia

2.1.4.6 Frecuencia de d3as con lluvia

2.1.4.7 R3gimen de los procesos atmosf3ricos que conducen a la formaci3n de precipitaciones

2.1.4.8 Frecuencia media de d3as con tormentas el3ctricas y granizo

2.1.5 Nubosidad

2.1.5.1 Frecuencia media de d3as con cielo claro

2.1.5.2 Frecuencia media de d3as con cielo cubierto

2.1.6 R3gimen de los vientos

2.1.7 Caracterizaci3n antropoclim3tica

2.1.7.1 Temperatura equivalente

2.1.7.2 Confortabilidad humana

2.1.8 Clasificaci3n clim3tica

2.1.8.1 Primer sistema propuesto por C.W. Thornthwaite

2.1.8.1.1 Indice de la precipitaci3n efectiva

2.1.8.1.2 Subtipos de acuerdo a la distribuci3n estacional de las lluvias

- 2.1.8.1.3 Temperatura eficiente
- 2.1.8.1.4 Concentración de la eficiencia termal de los tres meses de verano.
- 2.1.8.1.5 Zonas climáticas de la Pcia. de Corrientes s/el ler. sistema de Thornthwaite

2.1.8.2 Sistema de W. Koppen

2.1.8.3 Segundo sistema propuesto por C.W. Thornthwaite

- 2.1.8.3.1 Variación estacional de la eficiencia hídrica
- 2.1.8.3.2 Índice de eficiencia termal
- 2.1.8.3.3 Concentración de verano de la eficiencia termal
- 2.1.8.3.4 Clasificación climática de la Provincia según el segundo sistema de Thornthwaite.

2.1.9 Conclusiones

2.2 RECURSOS HIDRICOS

2.2.1 La situación actual del Conocimiento de los recursos hídricos

- 2.2.1.1 Introducción. Visión retrospectiva.
- 2.2.1.2 Enumeración y clasificación de los cursos y cuerpos de agua de Corrientes.
 - 2.2.1.2.1 Cuerpos de agua
 - 2.2.1.2.2 Ríos internacionales y ríos y arroyos interprovinciales
 - 2.2.1.2.3 Ríos, arroyos y otros cuerpos de agua interiores
- 2.2.1.3 La alimentación meteórica de la red hidrográfica y el balance hídrico.
 - 2.2.1.3.1 Distribución de la precipitación. Meses de exceso de agua y meses de déficit.
- 2.2.1.4 Los registros pluviométricos en Corrientes. El coeficiente de cobertura.
 - 2.2.1.4.1 Estaciones pluviométricas
 - 2.2.1.4.2 Estaciones hidrométricas
- 2.2.1.5 Los recursos de agua superficiales
 - 2.2.1.5.1 El escurrimiento superficial
 - 2.2.1.5.2 Aspectos básicos del aprovechamiento
 - i) Los índices característicos del escurrimiento
 - ii) El coeficiente de irregularidad anual
 - iii) El potencial bruto lineal. El potencial económico. La generación energética.
- 2.2.1.6 Conclusiones parciales
- 2.2.1.7 Recomendaciones

2.2.2 Orígenes y formación de la actual red hidrográfica correntina

- 2.2.2.1 Introducción
- 2.2.2.2 Hidrografía correntina al principio del Jurásico. El "Alto Paraná" y el "Alto Uruguay".
- 2.2.2.3 Las ingresiones marinas del terciario y el hiato mesocenoico.
 - 2.2.2.3.1 Primera ingresión maría: Mar Paranaense
 - 2.2.2.3.2 Segunda y tercera ingresión marina y Mesopotamiense Superior
 - 2.2.2.3.3 El Mesopotamiense Superior
- 2.2.2.4 El cuarto mar entreterriano
- 2.2.2.5 El plioceno inferior. El ciclo andino y la regresión marina. Los sucesivos derrames del Alto Paraná al Uruguay, al Aguapey y al Miriñay.
 - 2.2.2.5.1 Generalidades
 - 2.2.2.5.2 Los movimientos andinos y las fallas consecuentes
 - 2.2.2.5.3 Primera y Segunda fase del derrame hídrico. El Alto Paraná al Alto Uruguay. El Alto Paraná al Aguapey.
 - 2.2.2.5.4 Tercera fase del derrame hídrico. El Alto Paraná al Miriñay.

- 2.2.2.6 El plioceno medio y superior. El escurrimiento del Alto Paraná por Apipé. La depositación puelchense.
- 2.2.2.7 Los comienzos del cuartario. La época glacial. El Ensenadense. Formación del Carambola Batel-Batelito y Corrientes.
- 2.2.2.8 El pampeano. Belgranense; la falla del Paraná-Paraguay; el Paraguay invierte su derrame.
 - 2.2.2.8.1 El Ploistoceno superior. Bonaerense.
- 2.2.2.9 Post-Pampeano. Holoceno; la época de los grandes lagos cuaternarios; la época de los esteros; la formación de las dunas.
 - 2.2.2.9.1 Época de los grandes lagos.
 - 2.2.2.9.2 La época palustre o de los esteros.
 - 2.2.2.9.3 La formación de las dunas en el Holoceno.
- 2.2.2.10 La situación actual; los cambios climáticos y los movimientos del suelo.
- 2.2.2.11 Los movimientos del suelo en Corrientes. Los reconocimientos y la fotografía aérea.
 - 2.2.2.11.1 Generalidades
 - 2.2.2.11.2 La observación de las cartas geográficas y los reconocimientos en zonas específicas.
- 2.2.2.12 Los hechos observados en la provincia de Corrientes.
 - 2.2.2.12.1 El proceso de investigación.
 - 2.2.2.12.2 La interpretación de los hechos. Su confirmación.
- 2.2.2.13 Antecedentes bibliográficos y documentales.
- 2.2.2.14 Perfiles geohidrológicos.
- 2.2.2.15 Conclusiones generales y ubicación de posibles aprovechamientos.
 - Los dislocamientos. La regulación hídrica. Las posibles trazas de caminos.
 - La importancia del Alto Paraná en Apipé en el problema hídrico de Corrientes.
- 2.2.2.16 Recomendaciones parciales.
- 2.2.3 Los ríos de la Provincia de Corrientes. Sus Cuencas de Alimentación
 - 2.2.3.0 Introducción
 - 2.2.3.1 Cuenca del Arroyo Riachuelo
 - i) Situación
 - ii) Elementos Geométricos.
 - iii) Elementos Geomorfológicos.
 - iv) Elementos Hidrológicos.
 - 2.2.3.2 Cuenca del Arroyo Empedrado (Mismos elementos anteriores)
 - 2.2.3.3 Cuenca del Río Santa Lucía (Mismos elementos anteriores)
 - 2.2.3.4 Cuenca del Río Corrientes (Sin Iberá) (Mismos elementos anteriores)
 - 2.2.3.5 Cuenca del Río Guayquiraró (Mismos elementos anteriores)
 - 2.2.3.6 Cuenca del Estero del Iberá. (Mismos elementos anteriores)
 - 2.2.3.7 Cuenca del Río Aguapey. (Mismos elementos anteriores)
 - 2.2.3.8 Cuenca del Río Miriñay. (Mismos elementos anteriores)
 - 2.2.3.9 Cuenca del Río Mocoretá. (Mismos elementos anteriores)
- 2.2.4 Esteros y lagunas.
- 2.2.5 El agua subterránea.
 - 2.2.5.1 Introducción
 - 2.2.5.1.1 Antecedentes
 - 2.2.5.1.2 La alimentación hídrica de las capas subterráneas.
 - 2.2.5.2 Generalidades
 - 2.2.5.2.1 Cuencas hídricas subterráneas.
 - 2.2.5.2.2 Cuencas subterráneas bajo presión correspondiente a la serie triásica.
 - 2.2.5.2.3 Cuenca subterránea occidental
 - 2.2.5.2.4 Cuenca subterránea oriental

- 2.2.5.3 Inventario de pozos de agua de la provincia
- 2.2.5.4 El mapa hidrogeológico de la provincia de Corrientes
- 2.2.5.5 Análisis de la relación entre las precipitaciones y la capa freática

2.2.6 Composición química del agua superficial y subterránea.

- 2.2.6.1 Generalidades
- 2.2.6.2 Diagramas de Schoeller
- 2.2.6.3 Interpretación de los resultados

2.2.7 Aptitud de agua para riego

- 2.2.7.1 Generalidades
- 2.2.7.2 La relación adsorción sodio (RAS). Peligro de alcalinización.
- 2.2.7.3 Contenido salino. Peligro de salinización
- 2.2.7.4 El diagrama del U.S. Salinity Laboratory, Riverside, California.
- 2.2.7.5 Contenido en sodio.
- 2.2.7.6 Contenido en boro.
- 2.2.7.7 Contenido en bicarbonato.
- 2.2.7.8 Condiciones óptimas requeridas para que un agua sea para riego.
- 2.2.7.9 Aptitud para riego de las muestras de agua analizadas.

2.2.8 Conclusiones Generales de los Capítulos 2.2.5, 2.2.6 y 2.2.7

2.2.9 Recomendaciones a los capítulos 2.2.5, 2.2.6 y 2.2.7

2.3 LOS APROVECHAMIENTOS HIDRICOS.

2.3.1 Los proyectos estudiados y las obras ya realizadas.

Los proyectos y obras en estudio y/o en ejecución.

2.3.1.1 El agua potable.

2.3.1.1.1 La acción del O.S.N.

- i) Los servicios y la situación actual
- ii) El consumo y las tarifas.

2.3.1.1.2 El abastecimiento de agua a la comunidad rural y el desarrollo agropecuario.

- i) Antecedentes
- ii) La comunidad rural y el período de transición
- iii) La prioridad del abastecimiento de agua
- iv) El Servicio Nacional de Provisión de agua a zonas rurales.

2.3.1.1.3 Conclusiones y recomendaciones.

2.3.1.2 Riego y desagües

2.3.1.2.0 Introducción

2.3.1.2.1 Esteros San José, Riachuelo, Maloyas y Longaniza.

- i) Obra de desagüe efectuada por el Ing. H. Tvethe.
- ii) Obra de desagüe al arroyo Baí.
- iii) Proyecto de desagüe al zanjón Abra.
- iv) Canalizaciones en los esteros Maloyas y Longaniza y ampliación y rectificación parcial del cauce del Río Empedrado.
- v) Falta de conservación de las obras ejecutadas y de observaciones hidrométricas.
- vi) Aprovechamiento del agua de los esteros para el riego.
- vii) Volúmenes de agua que fluyen por los esteros.
- viii) Capacidad de conjunto necesaria para la evacuación de las aguas de los esteros San José, Riachuelo, Maloyas y Longaniza.
- ix) Inconvenientes del desecamiento total de los esteros.

- x) Necesidad y conveniencia de realizar estudios exhaustivos.
 - xi) Actualización de algunos proyectos.
 - xii) Extensión de las conclusiones expuestas.
- 2.3.1.2.2 Obras de desagüe y saneamiento en los alrededores de la ciudad de Corrientes.
- 2.3.1.2.2.1 Situación actual
- i) Desagüe Laguna Seca
 - ii) Desagüe Laguna Paiva o Pampín.
- 2.3.1.2.2.2 Oportunidad de realizar las obras proyectadas por la ex D.G. de Irrigación de la Nación.
- i) Lugares más favorables para futuras intervenciones.
- 2.3.1.2.3 Riego en Empedrado
- 2.3.1.2.3.1 Estudio del Ing. César Pozzi
- i) Relación entre el régimen pluvial y las necesidades de agua de las plantaciones.
 - ii) Arroz. Necesidad de riego artificial.
 - iii) Solución antieconómica.
 - iv) Nueva advertencia sobre el aprovechamiento del agua de las lagunas.
- 2.3.1.2.4 Colonia "Nueva Valencia".
- i) Causas del fracaso de la colonización
 - ii) Observaciones con respecto a la ley provincial Nº 38 de concesión.
 - iii) Capacidad de las obras construídas por el Sr. Blasco Ibañez. Breves comentarios sobre dotaciones de riego.
 - iv) Situación actual de la colonia.
- 2.3.1.2.5 Comisión de estudios en Corrientes
- i) Estudios realizados por el Ing. Alcorta
 - ii) Algunos datos sobre el cultivo del arroz.
 - iii) Superficies de la cuenca y de los esteros del Iberá.
 - iv) Proyecto Derivador Iberá - Aguapey.
 - v) Imposibilidad de embalsar en el Aguapey las aguas derivadas del Iberá
 - vi) Síntesis de algunas conclusiones referentes al Estero del Iberá y a la oscilación del nivel de sus aguas.
 - vii) Conveniencia de actualizar el proyecto de Evacuador Iberá-Aguapey.
 - viii) Síntesis de cálculos hidráulicos referentes al evacuador Iberá - Aguapey y a los Esteros en relación con aquél.
 - ix) Esbozo de algunas soluciones.
- 2.3.1.2.6 Desagüe Laguna Santa Rita (Esquina).
- i) Situación actual.
 - ii) Breves comentarios con relación a las obras realizadas.
- 2.3.1.2.7 Desagües en Goya.
- i) Situación actual.
- 2.3.1.3 La navegación y la energía
- 2.3.1.3.1 La navegación en los ríos y la acción de la Dirección Nacional de Obras Portuarias y Vías Navegables del M.O.P. de la Nación.
- i) La antigua navegación en el Paraná y en el Corrientes.
 - ii) La Ley 4170.
 - iii) La situación actual.
- 2.3.1.3.2 La energía
- i) Los estudios de los Ingenieros Gamberale y Mermoz
 - ii) Los estudios del Ingeniero Bruno Quinterno
 - iii) Los estudios del Ingeniero Luis Gallioli
 - iv) Los estudios del Ingeniero Santos Rossell

- v) Los estudios del Agrimensor Néstor Wauters.
- vi) El aprovechamiento múltiple de Salto Grande del Río Uruguay.
- vii) El aprovechamiento múltiple Yacyretá - Apipé.

2.3.2 Uso actual del agua. Control de derrames e inundaciones.

2.3.2.1 Agua Potable.

2.3.2.2 Regadío y las dotaciones de riego.

- i) Observaciones de reconocimiento.
- ii) Otros datos sobre el cultivo y riego de arroz.
- iii) Censo explotaciones de arrozales. Traslado de los mismos.
- iv) Dotaciones previstas.

2.3.2.3 Otros usos del agua. Usos industriales, Navegación. Hidroelectricidad.

2.3.2.4 Piscicultura y usos recreativos.

2.3.2.5 Control de derrames e inundaciones.

2.3.2.6 Conclusiones sobre el uso actual del agua.

2.4 EL SERVICIO HIDRAULICO Y LA AUTORIDAD DEL AGUA

2.4.1 El servicio Hidráulico

2.4.1.1 Las tareas del Servicio Hidráulico.

2.4.1.2 La organización del Servicio Hidráulico.

2.4.2 La autoridad de Agua.

2.5 RECOMENDACIONES GENERALES SOBRE ESTUDIOS Y OBRAS DE APROVECHAMIENTO HIDRICO.

2.6 ANTECEDENTES.

2.7 BIBLIOGRAFIA.

3.1 CONSIDERACIONES GENERALES

3.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS SUELOS DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES

3.2.1 Introducción

3.2.2 Rasgos fisiográficos

3.2.2.1 Región occidental

3.2.2.2 Región oriental

3.2.3 Rasgos edafológicos

3.2.4 Uso de los suelos, productividad y erosión

3.2.5 Manejo de los suelos con problema por exceso de agua temporal o permanente

3.2.6 Bibliografía

3.3 VEGETACION NATURAL

3.3.1 Rasgos principales de las regiones fitogeográficas.

3.3.2 La vegetación de los esteros y bañados

3.3.3 Aspectos generales de las zonas ecológicas Correntinas

3.3.4 Consideraciones generales sobre las regiones de pastoreo

3.3.5 Algunos "pastos" de los campos correntinos

3.3.6 La riqueza forestal

3.3.7 Algunas plantas empleadas en medicina popular

3.3.8 Principales plantas tóxicas para el ganado

3.3.9 Principales malezas y plantas invasoras

3.3.10 Algunas plantas con frutos o semillas comestibles

3.3.11 Glosario

3.3.12 Bibliografía

3.4 GANADERIA

3.4.1 Pasturas

3.4.1.1 Consideraciones generales

3.4.1.2 Praderas naturales

3.4.1.2.1 Desventajas y manejo inadecuado

3.4.1.2.2 Normas para su manejo

3.4.1.3 Forrajeras cultivadas

3.4.1.3.1 Algunas indicaciones

3.4.1.3.2 Especies de gramíneas y leguminosas forrajeras

3.4.1.4 Bibliografía

3.4.2 Especies ganaderas

3.4.2.1 Corrientes en la ganadería argentina

3.4.2.2 Zonas

3.4.3 Vacunos

3.4.3.1 Existencias

3.4.3.2 Razas

3.4.3.3 Composición del "stock"

3.4.3.4 Parición

3.4.3.5 Tecnología

3.4.3.6 Sanidad

3.4.3.7 Comercialización

3.4.3.8 Producción de leche

3.4.4 Ovinos

3.4.4.1 Existencias

3.4.4.2 Razas

VIII

- 3.4.4.3 Composición del "stock"
- 3.4.4.4 Parición. Tecnología. Sanidad
- 3.4.4.5 Comercialización
- 3.4.4.6 Producción de lana

3.4.5 Porcinos

- 3.4.5.1 Existencias
- 3.4.5.2 Comercialización

3.4.6 Equinos

- 3.4.6.1 Existencias
- 3.4.6.2 Sanidad

3.5 AGRICULTURA

3.5.1 Consideraciones generales

3.5.2 Tabaco

3.5.2.1 Corrientes en la producción tabacalera argentina

3.5.2.2 Características generales

3.5.2.2.1 Variedades. Zonas productoras

3.5.2.2.2 Las explotaciones algodoneras

3.5.2.3 Tecnología:

3.5.2.3.1 Cultivo

3.5.2.3.2 Sanidad

3.5.2.4 Mercados

3.5.2.4.1 Comercialización

3.5.2.4.2 El mercado mundial

3.5.2.5 Perspectivas

3.5.3 Algodon

3.5.3.1 Reseña histórica

3.5.3.1.1 Corrientes en la producción algodonera argentina

3.5.3.1.2 Evolución del cultivo y la producción

3.5.3.2 Características generales

3.5.3.2.1 Areas, producción y rendimientos.

3.5.3.2.2 Zonas productoras

3.5.3.2.3 Las explotaciones algodoneras

3.5.3.3 Tecnología

3.5.3.3.1 Variedades

3.5.3.3.2 Cultivo

3.5.3.3.3 Sanidad

3.5.3.4 Comercialización y desmote

3.5.3.5 Conclusiones y recomendaciones

3.5.4 Varios para la producción de fibras

3.5.4.1 Kenaf

3.5.4.1.1 Producción argentina y mundial

3.5.4.1.2 Perspectivas

3.5.4.2 Sisal

3.5.4.2.1 Producción mundial y argentina

3.5.4.2.2 Perspectivas

3.5.5 Lino

3.5.5.1 Consideraciones generales

3.5.5.2 Conclusiones

3.5.6 Tung

3.5.6.1 Corrientes en la producción argentina de tung

3.5.6.2 Perspectivas

3.5.7 Tártago o ricino

3.5.7.1 Corrientes en la producción argentina de tártago.

3.5.7.2 Características generales

3.5.7.3 Tecnología

3.5.7.4 Perspectivas

3.5.8 Girasol

3.5.8.1 Corrientes en la producción argentina de girasol

3.5.8.2 Tecnología

3.5.8.2.1 Clima y suelo

3.5.8.2.2 Variedades

3.5.8.2.3 Cultivo

3.5.8.2.4 Sanidad

3.5.8.3 Comercialización e industrialización

3.5.8.4 Conclusiones

3.5.9 Maní

3.5.9.1 Corrientes en la producción argentina de maní

3.5.9.2 Tecnología

3.5.9.2.1 Clima y suelo

3.5.9.2.2 Cultivo

3.5.9.2.3 Sanidad

3.5.9.3 Comercialización e industrialización

3.5.9.4 Conclusiones

3.5.10 Varios oleaginosos

3.5.10.1 Soja

3.5.10.1.1 Corrientes en la producción argentina de soja

3.5.10.1.2 Mercados

3.5.10.1.3 Conclusiones

3.5.10.2 Cártamo

3.5.10.2.1 Evolución y perspectivas

3.5.10.2.2 Conclusiones

3.5.10.3 Sésamo

3.5.10.3.1 Perspectivas

3.5.11 Yerba mate

3.5.11.1 Corrientes en la producción argentina de yerba mate

3.5.11.2 Tecnología

3.5.11.2.1 Suelo y clima

3.5.11.2.2 Cultivo

3.5.11.2.3 Sanidad

3.5.11.2.4 Cosecha

3.5.11.3 Elaboración

3.5.11.4 Mercados

3.5.11.4.1 Interno

3.5.11.4.2 Externo

3.5.11.5 Perspectivas

3.5.12 Te

3.5.12.1 Corrientes en la producción argentina de te.

3.5.12.2 Tecnología

3.5.12.2.1 Clima y suelo

3.5.12.2.2 Cultivo

3.5.12.2.3 Sanidad

3.5.12.2.4 Cosecha

3.5.12.3 Elaboración

3.5.12.4 Mercados

3.5.12.4.1 Comercialización

3.5.12.4.2 El te argentino y el mercado mundial

3.5.12.5 Perspectivas

3.5.12.5.1 Posibilidades futuras

3.5.12.5.2 Conclusiones

3.15.3 Mandioca

3.5.13.1 Corrientes en la producción argentina de mandioca

3.5.13.2 Cultivo y producción por departamentos

3.5.13.3 Perspectivas

3.5.14 Caña de azúcar

3.5.14.1 Características generales

3.5.14.2 Tecnología

3.5.14.2.1 Clima

3.5.14.2.2 Cultivo

3.5.14.2.3 Sanidad

3.5.14.2.4 Cosecha

3.5.14.3 Perspectivas

3.5.15 Maíz de Guinea

3.5.15.1 Corrientes en la producción argentina de maíz de Guinea

3.5.15.2 Perspectivas

3.5.16 Varios para la producción de esencias

3.5.16.1 Consideraciones generales

3.5.16.2 Citronela

3.5.16.2.1 Producción

3.5.16.2.2 Tecnología

3.5.16.2.3 Elaboración y comercialización

3.5.16.2.4 Mercados y perspectivas

3.5.16.3 Lemon grass

3.5.16.3.1 Producción

3.5.16.3.2 Tecnología

3.5.16.3.3 Elaboración y comercialización

3.5.16.3.4 Mercados y perspectivas

3.5.16.4 Menta japonesa

3.5.16.4.1 Producción

3.5.16.4.2 Tecnología

3.5.16.4.3 Elaboración y comercialización

3.5.16.4.4 Mercados y perspectivas

3.5.16.5 Vetiver

3.5.16.5.1 Producción

- 3.5.16.5.2 Tecnología
- 3.5.16.5.3 Elaboración
- 3.5.16.5.4 Mercados y perspectivas

3.5.17. Arroz

- 3.5.17.1 Corrientes en la producción arrocería argentina
- 3.5.17.2 Cultivo y producción por departamento.
- 3.5.17.3 Mercados y perspectivas
 - 3.5.17.3.1 Consumo interno
 - 3.5.17.3.2 Exportación

3.5.18. Maíz

- 3.5.18.1 Reseña histórica
 - 3.5.18.1.1 Corrientes en la producción argentina de maíz
 - 3.5.18.1.2 Evolución del cultivo y la producción
- 3.5.18.2 Características generales
 - 3.5.18.2.1 Áreas, producción y rendimientos
 - 3.5.18.2.2 Cultivo y producción por departamentos
 - 3.5.18.2.3 Las explotaciones maiceras
- 3.5.18.3 Tecnología
 - 3.5.18.3.1 Ecología
 - 3.5.18.3.2 Mejora de los rendimientos.
- 3.5.18.4 Perspectivas

3.5.19. Sorgos graníferos

- 3.5.19.1 Corrientes en la producción argentina de sorgos graníferos
- 3.5.19.2 Cultivo y producción por departamentos
- 3.5.19.3 Tecnología
- 3.5.19.4 Comercio y producción mundiales

3.5.20. Frutas

- 3.5.20.1 Corrientes en la producción frutícola argentina
 - 3.5.20.1.1 Citrus
 - 3.5.20.1.2 Otras frutas
- 3.5.20.2 Producción por zonas y departamentos
 - 3.5.20.2.1 Zonas frutícolas
 - 3.5.20.2.2 Producción por departamentos
- 3.5.20.3 Tecnología citrícola
 - 3.5.20.3.1 Nivel tecnológico actual
 - 3.5.20.3.2 Viveros
 - 3.5.20.3.3 Cosecha y empaque
- 3.5.20.4 Mercados
 - 3.5.20.4.1 Evolución mensual de la oferta
 - 3.5.20.4.2 Precios a los productores
 - 3.5.20.4.3 Plazas de destino
 - 3.5.20.4.4 Consumo
 - 3.5.20.4.5 Industrialización
 - 3.5.20.4.6 Exportación
 - 3.5.20.4.7 Cooperativas

3.5.21. Hortalizas

- 3.5.21.1 Corrientes en la producción hortícola argentina
- 3.5.21.2 Características generales
 - 3.5.21.2.1 Cultivo y producción, por especies
 - 3.5.21.2.2 Zonas productoras
 - 3.5.21.2.3 Las explotaciones hortícolas
- 3.5.21.3 Tecnología
 - 3.5.21.3.1 Nivel tecnológico actual

3.5.21.3.2 Variedades

XII

3.5.21.4 Mercados

3.5.21.4.1 Evolución mensual de la oferta

3.5.21.4.2 Distribución y movilización de la producción

3.5.21.4.3 Industrialización

3.5.21.5 Conclusiones

3.6 LOS TRANSPORTES EN RELACION CON LA PRODUCCION AGROPECUARIA

3.6.1 Consideraciones generales

3.6.2 Navegación fluvial. Puertos

3.6.3. Ferrocarriles

3.6.4 Caminos

3.6.5 Transporte aéreo

3.7 ESTRUCTURA SOCIO-ECONOMICA DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA

3.7.1 Población y tenencia de la tierra

3.7.1.1 Población

3.7.1.2 Sistemas de tenencia

3.7.1.3 Análisis por departamentos

3.7.1.3.1 Bella Vista

3.7.1.3.2 Berón de Astrada

3.7.1.3.3 Capital

3.7.1.3.4 Concepción

3.7.1.3.5 Curuzú Cuatiá

3.7.1.3.6 Empedrado

3.7.1.3.7 Esquina

3.7.1.3.8 General Alvear

3.7.1.3.9 General Paz

3.7.1.3.10 Goya

3.7.1.3.11 Itatí

3.7.1.3.12 Ituzaingó

3.7.1.3.13 Lavalle

3.7.1.3.14 Mburucuyá

3.7.1.3.15 Mercedes

3.7.1.3.16 Monte Caseros

3.7.1.3.17 Paso de Los Libres

3.7.1.3.18 San Cosm

3.7.1.3.19 Saladas

3.7.1.3.20 San Luis del Palmar

3.7.1.3.21 San Martín

3.7.1.3.22 San Miguel

3.7.1.3.23 Santo Tomé

3.7.1.3.24 San Roque

3.7.1.3.25 Sauce

3.7.2 Colonización

3.7.2.1 Consideraciones generales

3.7.2.2 La colonización en Corrientes

3.7.3 Productividad y rentabilidad de la tierra

3.7.3.1 Consideraciones generales

3.7.3.2 Ganadería

3.7.3.3 Tabaco

3.7.3.4 Algodón

3.7.3.5 Girasol

3.7.3.6 Maní

3.7.3.7 Arroz

- 3.7.3.7.1 En la zona noroeste
- 3.7.3.7.2 En la zona del río Uruguay

3.7.3.8 Naranja

XIII

3.7.4 Análisis conjunto de los mercados

3.7.4.1 Producción ganadera

- 3.7.4.1.1 Carne vacuna
- 3.7.4.1.2 Lana
- 3.7.4.1.3 Leche
- 3.7.4.1.4 Cerdos y avicultura

3.7.4.2 Producción agrícola

- 3.7.4.2.1 Yerba mate
- 3.7.4.2.2 Té
- 3.7.4.2.3 Tabaco
- 3.7.4.2.4 Arroz
- 3.7.4.2.5 Frutas cítricas
- 3.7.4.2.6 Algodón
- 3.7.4.2.7 Yute, kenaf y otras fibras largas
- 3.7.4.2.8 Tung
- 3.7.4.2.9 Mandioca
- 3.7.4.2.10 Semillas oleaginosas
- 3.7.4.2.11 Maíz
- 3.7.4.2.12 Sorgos graníferos

3.8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.8.1 Recapitulación

3.8.2 Suelos

3.8.3 Producción ganadera

3.8.3.1 Vacunos

3.8.3.2 Otras especies

- 3.8.3.2.1 Ovinos
- 3.8.3.2.2 Equinos
- 3.8.3.2.3 Porcinos y aves

3.8.4 Producción agrícola

3.8.4.1 Cultivos industriales

3.8.4.1.1 Tabaco

3.8.4.1.2 Algodón

3.8.4.1.3 Cultivos para la producción de fibra largas (kenaf, sisal)

3.8.4.1.4 Cultivos oleaginosos (Maní, girasol, soja, cártamo, sésamo, tártago, tung)

3.8.4.1.5 Otros (Yerba mate, té, mandioca, caña de azúcar, maíz de guinea, citronela, lemon grass, menta japonesa, vetiver)

3.8.4.2 Cereales y forrajeras

3.8.4.2.1 Arroz

3.8.4.2.2 Maíz

3.8.4.2.3 Sorgos graníferos

3.8.4.3 Frutas

3.8.4.3.1 Naranja

3.8.4.3.2 Pomelo

3.8.4.3.3 Limón

3.8.4.3.4 Citrus en general

3.8.4.3.5 Banana

3.8.4.4 Hortalizas

3.8.5 Tenencia de la tierra. Colonización

3.8.6 Prioridades

4 ASPECTOS INSTITUCIONALES Y LEGALES

4.1 PRIMERA PARTE - CODIGO DE AGUAS

4.1.1 Examen preliminar de las cuestiones legales:

4.1.1.1 Análisis de los problemas que plantea la realización de las obras hidráulicas:

- 4.1.1.1.1 Terrenos afectados por las obras
- 4.1.1.1.2 Expropiación
- 4.1.1.1.3 Indemnización por compensación
- 4.1.1.1.4 Servidumbre de presa
- 4.1.1.1.5 Obligaciones que recaen sobre la propiedad
- 4.1.1.1.6 Derechos al agua afectados por las obras
- 4.1.1.1.7 Solución posible en nuevos usos
- 4.1.1.1.8 Soluciones a los intereses nacionales y extranjeros
- 4.1.1.1.9 Análisis de los problemas que plantea la acción de la naturaleza

4.1.1.2 Análisis de la legislación vigente: Estudio de las normas que deben ser consideradas:

4.1.1.2.1 Disposiciones federales:

- a) La Constitución Nacional
 - i) La navegación es de jurisdicción nacional
 - ii) El aprovechamiento hídrico es de jurisdicción provincial
 - iii) Facultades de la Provincia
- b) Los Códigos Nacionales:
 - i) Normas sobre esteros y lagunas
 - ii) Aguas subterráneas
 - iii) Cursos de aguas interiores y limítrofes
- c) Otras Leyes Nacionales.

4.1.1.2.2 Disposiciones de carácter interprovincial

4.1.1.2.3 Disposiciones de carácter internacional

4.1.1.2.4 Disposiciones de carácter local :

- a) La Constitución Provincial
- b) El Código Rural:
 - i) Principios de política hídrica
 - ii) Procedimientos para el otorgamiento de concesiones
 - iii) Uso doméstico del agua
 - iv) Uso municipal
 - v) Uso agropecuario
 - vi) Consorcio de Regantes
 - vii) Uso hidroeléctrico e industrial
 - viii) Uso minero
 - ix) Uso piscícola
 - x) Uso recreativo
 - xi) Uso excepcional
 - xii) Exploración del agua
 - xiii) Control del efecto nocivo
 - xiv) Servidumbre

4.1.2 Bosquejo de disposiciones principales de un futuro proyecto de Código de Aguas

4.1.2.1 Metodología

4.1.2.2 Anteproyecto de Código de Aguas

Capítulo I Disposiciones generales (Arts. 1 a 27)

Capítulo II De la Administración del Agua (Arts. 28 a 39)

Capítulo III Disposiciones aplicables a obras a realizar en aguas internacionales o interprovinciales (Arts. 40 a 48)

Capítulo IV Disposiciones aplicables a aguas o superficies privadas afectadas por obras autorizadas (Arts. 49 a 59)

Capítulo V Consorcio de usuarios. (Arts. 60 a 72)

Capítulo VI Financiación de las obras y servicios (Arts. 73 a 91)

Capítulo VII Conservación del agua. (Arts. 92 a 100)

4.2 SEGUNDA PARTE - ENTE

Proyecto de un ente provincial coordinador de las investigaciones y realizaciones sobre recursos hídricos de carácter agropecuario

4.2.1 Exposición de motivos

4.2.2 Estructura de la administración

4.2.3 Estructura del Ente proyectado

4.2.4 Fuentes y antecedentes

4.2.5 Texto del proyecto

1.- INTRODUCCION

El propósito del presente estudio es establecer de la manera más fehaciente posible el estado actual de los principales factores básicos de la economía de la provincia de Corrientes, es decir sus recursos humanos y naturales y su producción agropecuaria.

Para ello ha debido hacerse una investigación profunda y exhaustiva de antecedentes, informaciones, bibliografía, actuaciones oficiales, estadísticas, etc., complementando esa tarea con investigaciones originales en todos los casos que ha sido necesario.

Si bien este trabajo es dada su naturaleza, esencialmente descriptivo y no avanza, por lo tanto, en el estudio detallado de proyectos de las obras que pueden aparecer como necesarias - lo cual deberá, en todo caso, ser objeto de trabajos ulteriores - se llega en todos los aspectos considerados a conclusiones concretas en cuanto a su utilidad presente o a sus deficiencias y se formulan recomendaciones que se estiman pertinentes para modificar o mejorar el actual estado de cosas.

El tema ha sido tratado en tres diferentes aspectos, que fueron considerados y agotados separadamente.

1) El primero abarca el clima de la provincia de Corrientes y sus recursos hídricos, y consiste en un análisis exhaustivo de los elementos del clima correntino, llevado a una profundidad que permite suponer que tal vez sea el trabajo más completo realizado hasta el presente en esa materia; y, por otra parte, en una evaluación de los recursos hídricos, mediante el estudio de los correspondientes a cada una de las cuencas principales de la provincia, tendiente a permitir su eventual aprovechamiento con fines de desarrollo agropecuario.

En esta mención muy general puede señalarse que, en esa tarea, se han determinado los balances hídricos mensuales para cada cuenca, el escurrimiento superficial y los coeficientes de escurrimiento.

Se ha llegado a la definición hidrológica neta de cada cuerpo de agua.

Se establecieron los caudales de creciente "ordinaria", tema vinculado con los institucionales y legales en cuanto a la definición de los dominios públicos y privado.

Se han determinado los potenciales brutos lineales, el potencial económico y la generación energética total.

En lo geomorfológico se ha hecho un análisis profundo de los orígenes

del sistema hidrográfico, sobre cuya base se cree haber descubierto las causas del comportamiento hídrico de la red de drenaje correntina.

Se establecieron 72 posibilidades de aprovechamiento hídrico para embalse, saneamiento, corrección de pasos de la navegación, de apoyo de obras, puentes, diques, etc.

Se ha trazado un bosquejo de plan de largo alcance para saneamiento parcial y progresivo de los esteros del Iberá.

Se diseñó el mapa hidrogeológico de la provincia.

Se han realizado análisis de aguas superficiales y subterráneas en puntos predeterminados del territorio provincial, habiéndose establecido con ellos su aptitud para consumo humano y para regadío.

Finalmente se trazaron los lineamientos para la creación, en vinculación con el aspecto institucional y legal, del Servicio Hidráulico provincial, a cuyo fin se ha preparado un esquema organizativo.

2) El segundo aspecto considerado es el agropecuario. En este terreno se ha tenido como guía constante la preocupación de indagar las causas, el porqué de la relativa falta de evolución general de la agricultura de la provincia de Corrientes, cuyo territorio se halla favorecido, sin embargo, con la existencia de factores naturales realmente positivos.

En este orden de ideas se han estudiado, en primer lugar, los recursos naturales constituidos por los suelos y la vegetación. El carácter de estudio de gran visión con que se han enfocado los suelos no obsta a que se haya podido trazar un mapa general de ellos para la provincia y a que se arribe a conclusiones y recomendaciones en cuanto a su utilización y manejo.

La vegetación natural ha sido descripta sistemáticamente.

La producción ganadera y la producción agrícola han sido consideradas "in extenso" y detalladamente para cada uno de sus rubros desde el punto de vista de la ubicación de la provincial, por la correspondiente producción, dentro del panorama nacional; de los aspectos técnicos de la producción; y de los aspectos económicos, como la comercialización, la industrialización y muy particularmente el estudio de los correspondientes mercados, (interno y externo), dando a estos últimos toda la importancia que tienen, como base y punto de partida para cualquier acción de promoción que se quiera emprender.

Este análisis abarca más de 30 rubros.

Otro tema de necesaria inclusión en un estudio de esta naturaleza ha sido el examen del estado actual y las posibilidades futuras, en cuanto a infraestructura y servicios públicos, de lo referente a los transportes, por su trascen-

dente incidencia en la organización de la distribución y comercialización de los productos agropecuarios. Su importancia es tal que puede ser decisiva para la ampliación de las actuales zonas de producción y para la apertura de nuevas.

La tenencia de la tierra, la población rural y las producciones zonales en relación con esos factores han sido materia de un capítulo especial, ya que se los considera tópicos fundamentales a ser tenidos en cuenta en relación con la promoción o la reestructuración de la producción que - es bueno no olvidarlo - deben tener como objetivo final el mejoramiento del nivel de vida de los individuos y por ende el de sus condiciones físicas y espirituales.

Se mencionan las bases generales y la orientación que se estima debería imprimirse a una posible acción de colonización, cuyo estudio detallado podría hacerse más adelante, si fuera necesario.

Siempre con la preocupación de agotar la investigación de todos los factores concurrentes a la necesaria evolución de la agricultura correntina, se ha estudiado la productividad y rentabilidad de la tierra en distintas zona y sobre la base de distintos productos, algunos de actual y antigua producción en la provincia y otros de posible implantación o difusión de acuerdo con las ideas que se esbozan y las recomendaciones que se formulan en cunato a la reestructuración de la producción agropecuaria correntina.

Se ha efectuado una estimación general de las posibles metas que podrían alcanzarse en un determinado período de tiempo si, mediante la aplicación de las medidas que en cada caso se indican, se lograra poner en marcha un verdadero plan de promoción agropecuaria.

3) Las cuestiones institucionales y legales emergentes o involucradas en los asuntos referidos anteriormente, sobre todo en lo que se refiere al derecho de aguas y a la acción oficial de promoción agropecuaria, constituyen la materia del tercer aspecto considerado en este estudio.

Dos cuestiones son objeto de atención: 1° los fundamentos y antecedentes para el estudio de un Código de Aguas y bosquejo de sus disposiciones principales; 2° proyecto de un Ente Provincial coordinador de las investigaciones y realizaciones sobre recursos hídricos de carácter agropecuario.

Para la primera cuestión se ha contemplado la necesidad de reglar la intervención de la provincia en la programación del uso de las aguas del dominio público, de crear una Autoridad de Aguas, de deslindar el dominio público y el privado de las aguas y de sus cursos, de reglar las facultades del estado provincial y de los particulares para la realización de obras hidráulicas, y finalmente se estudia la forma de auspiciar las actividades del empresario particular de aguas.

El proyecto de Ente contenido en el segundo punto está motivado por la innegable necesidad de coordinar la acción agropecuaria oficial con la privada

y la de establecer una política agropecuaria coherente y estable.

Como se ve, el campo cubierto por este estudio es amplio, y se halla complementado por 336 cuadros estadísticos, 97 gráficos y 94 mapas. Los antecedentes ubicados, el panorama descripto, las conclusiones a que se arriba y las recomendaciones que se formulan configuran — así lo creen sus autores — un instrumento adecuado y sobre todo una base y un punto de partida sólido para profundizar cualquier investigación ulterior que se desee realizar en la materia objeto de aquél.

Consultores intervinientes

Ing. Agrónomo Darío P. Bignoli — Pasturas y Agronomía General,
Vegetación y Cultivos.

Doctor Alberto E. Cano — Producción y Sanidad Animal.

Ing. Agrónomo René P. Delpech — Planificación Agropecuaria.

Ing. Civil Bruno V. Ferrari Bono — Recursos y Aprovechamientos hídricos.

Ing. Civil Alfredo G. Galmarini — Meteorología.

Ing. Agrónomo Rafael García Mata — Economía Agraria y Agronomía General.
Vegetación y Cultivos.

Ing. Civil Juan Carlos Passalacqua — Riego y Desagües.

Doctor Eduardo A. Pigretti — Aspectos Institucionales y legales.

Ing. Agrónomo Alfredo E. Rasp — Fruticultura y Horticultura.

Ing. Agrónomo Manfredo Reichart — Edafología.

Ing. Agr. René P. Delpech
Director y Coordinador
General del Estudio

Ing. Civil Guido C. Belzoni
Director — Gerente

4. ASPECTOS INSTITUCIONALES Y LEGALES

El presente capítulo contiene un anteproyecto de Código de Aguas y un proyecto de Ente coordinador de investigaciones y realizaciones de carácter agropecuario.

Para la redacción de tal anteproyecto se ha tenido en cuenta en forma especial los problemas que presenta al derecho la realización de obras hidráulicas, por cuanto en esta materia los organismos provinciales no tienen experiencia anterior alguna.

También se ha analizado con todo detalle la legislación vigente sobre aguas, a fin de evitar la superposición o colisión entre las normas a dictarse y las existentes.

Los estudios referidos preceden al texto del anteproyecto y orientan respecto de las soluciones que se proponen.

Por lo demás el anteproyecto atiende a las siguientes premisas:

- a) Necesidad de reglar las formas de participación de la Provincia en la programación del uso de las aguas de su dominio público, sea a nivel internacional, nacional, o local.
- b) Necesidad de crear una Autoridad de Aguas encargada del otorgamiento al Estado o a particulares de derechos de uso del dominio público hídrico. Consecuente ejercicio del poder de policía sobre las aguas privadas.
- c) Necesidad de deslindar el dominio público y privado de las aguas y sus cursos, tarea que se encomienda a la autoridad de aguas con el objeto de dar estabilidad y seguridad a los derechos.
- d) Conveniencia de mantener la vigencia del Libro III del Código Rural local, en cuanto establece normas adecuadas de manejo de aguas y permite la participación estatal o privada, según lo aconsejen las necesidades de lugar y momento.
- e) Conveniencia de reglar de modo especial las facultades del estado provincial y de los particulares, en lo que a realización de obras hidráulicas se refiere.
- f) Auspicio del empresario particular de las aguas (concesionarios) sea mediante consorcios de usuarios, mediante empresas privadas o particulares interesados en cuanto constituya un factor de promoción de riqueza.

En lo que al proyecto de ente coordinador se refiere, se estructura el mismo tratando de adecuarlo a las necesidades actuales y conforme el estado económico de la Provincia. Se persigue evitar la creación de un organismo burocrático oneroso y estéril en sus resultados.

Las premisas esenciales que se han tenido en cuenta respecto del ente pueden concretarse en las dos siguientes:

- a) Necesidad de coordinar los esfuerzos locales de investigación o realización agropecuaria, sean oficiales o privados.
- b) Conveniencia de que los poderes públicos adopten con la participación de todos los sectores la línea de política agropecuaria que se estime más conveniente para los intereses económicos de la Provincia, determinación que deberá revisarse a intervalos razonables.

Precede al texto de proyecto de Ente, una exposición de los motivos que han sido tenidos en cuenta para concretar el articulado que se presenta.

4.1. PRIMERA PARTE

CODIGO DE AGUAS

4.1.1. EXAMEN PRELIMINAR DE LAS CUESTIONES LEGALES

4.1.1.1. ANALISIS DE LOS PROBLEMAS QUE PLANTEA LA REALIZACION DE OBRAS HIDRAULICAS.

En la realización de las obras de aprovechamiento hidráulico pueden presentarse situaciones distintas según fuere el realizador de la misma. En nuestro caso y para los efectos de esta relación debemos particularizarnos en las obras que tome a su cargo el Estado Provincial, las que conforme propiciamos para el futuro, deben

tener el carácter de obras de fomento, en los casos en que no existan concesionarios dispuestos a llevar a cabo los proyectos

La circunstancia de que el Estado realice los aprovechamientos y trabajos como si fuera de fomento, no implica que no pueda aplicarse principios de financiación conforme a los cuales, la tributación de los particulares beneficiados, favorezcan la masa de capitales necesaria para llevar a cabo los proyectos. En el Código Rural que glossaremos, expondremos las posibles coincidencias que pueden lograrse con la participación de los particulares interesados. Ahora sin embargo, lo que nos preocupa, es prevenir los principales conflictos que pueden producirse por efecto de la realización de obras por el Estado. Las conclusiones de este análisis serán aplicables a la realización por concesionarios.

La primera dificultad de carácter legal, surge en los artículos 2645 y 2646 del C. Civil, que disponen que en ningún caso puede realizarse obras que superen la mitad del lecho. La correcta interpretación de esta disposición indica que esta limitación debe aplicarse con exclusividad a las aguas privadas y a la relación entre riberanos que tales aguas imponen.

Esclarecido el alcance del texto legal, debemos destacar que los principales intereses que una obra hidráulica afecta, son los relacionados con los inmuebles particulares que ella ocupa y los derechos que, por aprovechamientos hídricos anteriores pueden perjudicarse.

4.1.1.1.1. - Terrenos afectados por las obras.

Con relación a los terrenos particulares, los espacios a ser ocupados por las estructuras pueden afectarse a la obra de dos modos: mediante la expropiación o estableciendo respecto de las partes afectadas la servidumbre llamada de "presa".

4.1.1.1.2. - Expropiación.

El primer sistema ha sido invariablemente utilizado en el país, por su sencillez. Para determinar los sectores a expropiar es indispensable demarcar previamente el sector del lecho que corresponde al dominio público y que en consecuencia marca el límite expropiable. Para facilitar la tarea, en las normas que se proyectan se indica que es previo a todo aprovechamiento el establecimiento de la línea de ribera por parte de la Administración. Con tal determinación, puede advertirse que gran parte de las instalaciones puede quedar en el lecho de los caudales, con lo que la expropiación puede disminuirse o incluso no ser necesaria, si el cauce es amplio.

Conforme la experiencia que tiene la administración en materia de expropiaciones, es preferible dejar en sus manos el procedimiento respectivo, con las excepciones que la ley que se proyecta y el Código Rural prevé para supuestos especiales.

4.1.1.1.3. - Indemnización por compensación

Un caso que se propone, es el de compensar la superficie que se expropia con la porción de lecho desecado que resulta por efecto de las mismas obras. La compensación se aplica en el caso que la parcela desecada no perturbe la explotación que en el fundo se viene realizando, al menos de manera evidente. La parcela que resulta deberá tasarse de los efectos de poder compensar su valor con el equivalente correspondiente a la indemnización.

En el caso de proceder la compensación en cuestión, el expropiado devolverá la indemnización que la hubiere sido depositada en juicio en el valor pertinente y simultáneamente se le dará posesión del terreno desecado.

Si la compensación no fuera posible por su efectiva inconveniencia para el expropiado, el lecho desecado podrá ser adquirido por terceros en el precio que su tasación por la administración indique. En todos los casos se impondrá la pública subasta.

Fuera de esta hipótesis, si los aprovechamientos son de riego, seguramente mantendrán la línea general de cursos naturales que por contener aguas que corren pertenecen al dominio público.

Cuando los nuevos canales no coinciden con los cursos citados, la compensación podrá también ser impuesta por la administración, sin perjuicio de las donaciones que los propios interesados puedan efectuar en procura de beneficiarse con el sistema de riego o aprovechamiento a establecer.

Si el nuevo uso, permite dejar sin utilización directa los cauces que fueran desecados, tales terrenos se mantendrán en el dominio público en el caso que se destinen los lugares a utilidad pública, la que podría resultar del establecimiento de un camino u otra obra pública. Esta conclusión surge del Art. 2340 Inc. 7 del C.Civil.

Las obras de aprovechamiento por parte de los particulares beneficiados por un aprovechamiento nuevo, corren de su cargo y la autoridad pueda facultada para exigir el cumplimiento de las obras complementarias por parte de los solicitantes individuales en sus propios fundos.

4.1.1.1.4 Servidumbre de presa.

En lo que se refiere a la servidumbre de presa, deseamos indicar una opinión contraria a su utilización. Como ha quedado dicho, la parte principal de todo embalse u obra quedará invariablemente situada en el lecho del cauce público. Sólo los extremos de la obra apoyarán en las propiedades particulares, lo que supone porciones menores de inmuebles afectados en muy poca escala. Afectar esos sectores a una servidumbre de carácter público, fatalmente indemnizable no resulta atrayente para el propietario, que de todos modos requerirá una indemnización, la que en cualquier caso alcanzará, al menos, a la mitad del valor del terreno ocupado.

La servidumbre, en cambio, será conveniente en su utilización por particulares en los casos en que las obras no alcancen a servir en forma inmediata sus propiedades y les sea acordado un aprovechamiento.

4.1.1.1.5 Obligaciones que recaen sobre la propiedad.

En ningún caso será obligatorio el solicitar el uso de un aprovechamiento de agua novedoso. Sin embargo, todas las propiedades quedan sujetas al pago de una contribución especial, en razón del mayor valor que adquirieren las tierras después de las obras realizadas. Efectuando los trabajos de un concesionario, la contribución especial podrá ser sustituida por la obligación que la concesión reconozca del propietario favorecido por el mayor valor de su terreno, en favor del concesionario.

Tales créditos podrán ser percibidos por el concesionario sólo mientras sea titular de la concesión y en el monto que la Autoridad de Aguas establezca.

La falta de pago de esta obligación permitirá la ejecución de la obligación por vía de apremio o juicio ejecutivo según fuere el caso.

4.1.1.1.6 Derechos al agua afectados por las obras.

Fuera de las situaciones expuestas, que se vinculan a la propiedad de los terrenos, debe analizarse las dificultades que pueden presentarse por efecto de la existencia de un aprovechamiento anterior en la zona que va a ser objeto de un nuevo aprovechamiento.

El principio tradicionalmente admitido en materias de aguas es el carácter perpetuo de las concesiones, que queden sometidas a causales expresamente detalladas de caducidad. El Código Rural de Corrientes señala como causales de caducidad, la falta de construcción de las obras en el modo y forma que la autoridad indique o la falta de uso por un año, cuando de riego se trata.

Pero el Código de Corrientes establece que no tienen carácter perpetuo sus concesiones, sino que por el contrario están sujetas a las contingencias de los derechos temporarios que se conceden sobre las cosas del dominio público. Esta manifestación la hace en particular en el Art. 679.

4.1.1.1.7. Solución posible en nuevos usos.

Este principio establece un verdadero estilo en lo que a uso de agua se refiere, cuando se presenta la posibilidad de realizar un uso nuevo de un determinado caudal que puede implicar -conforme las disposiciones que se proyectan- triplicar el rendimiento económico de la anterior explotación. Este tipo de solución que estimamos novedosa, tiene a su favor la especial geografía de Corrientes, característica por la abundancia de sus aguas. Es por ello, que puede presumirse el abandono de un uso en beneficio de otro, que rendirá a la comunidad un provecho dos veces mayor de el que hasta en ese momento produjera el anterior.

En las provincias en que los caudales están en forma definitiva acordados y en que el uso único es la irrigación, se comprende que no se reconozca la existencia

del tipo de normas que señalamos, que resulta capaz de solucionar los conflictos de intereses al mismo tiempo que permite planificar los aprovechamientos con un porcentaje mucho mayor de efectivo rendimiento colectivo.

De no admitirse esta tesis, un determinado uso podría perjudicar a toda una región, que podría verse limitada a un tipo de utilización, en detrimento de sus posibilidades potenciales.

4.1.1.1.8 - Soluciones a los intereses Nacional y Extranjeros.

El uso distinto de los lechos y caudales deberá ser aprobado por la Autoridad de Aguas, cuando se trata de aguas que están situadas en el territorio Provincial.

Cuando se trate de aguas limítrofes con otras provincias, el P.E., notificado de la conveniencia del nuevo uso por la Autoridad de Aguas, propondrá a la provincia limítrofe el nuevo régimen, con cuidada exposición de los motivos del cambio, conforme sea el beneficio que se espera de tal uso y cuando el mismo implique un rendimiento excepcional a criterio del P.E. podrá éste gestionar una ley especial mediante la cual se indemnicen los usos de la provincia vecina, y se adquiriera un derecho mayor de uso con respecto al caudal o lecho reconocidos.

En este caso, el tratado suscripto deberá ser comunicado al Congreso Federal conforme los términos del Art. 107 de la Constitución Nacional, con indicación expresa de la coordinación efectuada con los organismos nacionales, para mantener el respeto por la jurisdicción marítima que le compete al Gobierno Federal.

Cuando el nuevo aprovechamiento que se proyecta afecte aguas limítrofes internacionales, el P.E. recabará la colaboración del gobierno Federal a fin de convenir, mediante la intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, la ocupación o uso de los caudales o lecho que no corresponda a la jurisdicción argentina, en cuyo caso, será indispensable obtener el tratado pertinente con el estado vecino, al cual se indemnizará conforme las normas del derecho internacional y a través de los organismos que el Gobierno Federal determine.

Cuando la obra que se proyecta, sea en aguas interprovinciales, o en aguas internacionales, debe ser realizada por concesionario, el gobierno de la Provincia estará obligado a realizar las gestiones necesarias para obtener la situación descrita en los párrafos anteriores, dejándose en claro que la falta de éxito de tales gestiones, no dará derecho a indemnización o reclamo alguno por parte del concesionario en cuestión.

Si la obra hidráulica, beneficia a los estados sobre cuyas riberas se establecen, podrá establecerse los porcentajes de uso que a cada uno corresponde, tratando de establecer de mutuo acuerdo, las proporciones que a cada uno corresponda financiar, teniéndose en cuenta las situaciones anteriores al proyecto y perjuicios y beneficios que la concreción de la obra implicará.

Cuando en la obra participen dos estados o dos provincias, con utilización efectiva del sistema, el gobierno y operación del aprovechamiento corresponderá a un comité conjunto, ante el cual deberá existir una amplia representación provincial.

Los propietarios de inmuebles afectados por las obras hidráulicas, no tendrán otro derecho a indemnización que el que les corresponda por la expropiación de sus inmuebles o los daños que demuestren efectivamente haber sufrido. Establecida la existencia de un aumento efectivo del valor de sus bienes, el P.E. podrá imponerles una contribución especial.

4.1.1.1.9 - Análisis de los problemas que plantea la acción de la naturaleza.

Fuera de las hipótesis que puede plantear la acción humana en relación a las propiedades o derechos de aprovechamiento que su quehacer provoca, es necesario que reseñemos, la acción que por sí misma realiza la naturaleza en cuanto ella puede perturbar el estado jurídico de determinados lugares.

Este desarrollo se vincula, en consecuencia, al obrar que es posible reconocer en favor de la Administración, cuando un simple hecho físico altera los derechos existentes y la Administración se encuentra en condiciones de mejorar sus derechos o perderlos según los casos.

el fenómeno natural consista en el desplazamiento del caudal de agua en sí mismo, o en el desplazamiento de sedimentos de naturaleza terrosa dentro del caudal, caudal que por su parte puede encontrarse en un lecho inmutable o como en el primer caso, desplazarse del lecho que ocupa.

El interés que el Estado puede tener en tales desplazamientos se advierte en forma inmediata, cuando se atiende a que es el titular del dominio público y en consecuencia, según sean las soluciones verá perjudicado o aumentado su patrimonio. Los particulares por su parte, se benefician o perjudican en la medida en que el Estado tiene algún detrimento o incremento.

En nuestro caso, conforme la organización política del Estado, según el lugar en que los hechos se produzcan benefician a la Nación o las provincias. Todo depende del territorio que se afecta por los movimientos de aguas o tierras.

Las soluciones que se ofrecen, están basadas en lo establecido por el Código Civil, cuyos principios esenciales tanto en lo que se vincula al aspecto de derecho público como al derecho privado, se respetan en las disposiciones que por el presente estudio se proyectan o en el Código Rural han quedado estructurados.

Esta uniformidad legislativa favorece la conveniente resolución de las cuestiones, a más de evitar entorpecimientos o conflictos de legislación.

Cuando el fenómeno natural es el desplazamiento de las aguas, podemos distinguir según ese desplazamiento se produzca insensiblemente (*alveus exsicavatus*) o se forme un nuevo curso brusco, abandonándose el anterior (*alveus derelictus*).

En el primer caso (retiro insensible de las aguas) el cauce abandonado corresponde al ribereño por aplicación del Art. 2573 del C.Civil, sin que haya motivo a indemnización alguna por parte del ribereño que ve ocupar su inmueble insensiblemente por el desplazamiento. El dominio público del Estado, se mantendrá sobre el lecho por el cual se desplaza el caudal y cuando la diferencia sea notable le corresponderá a la Autoridad de Aguas determinar nuevamente la línea de ribera, concretando el beneficio del propietario ribereño favorecido y determinando el perjuicio del ribereño ocupado por las aguas.

La razón de esta disposición es el regularizar las situaciones que la propia naturaleza crea, provocando una solución natural para el problema.

Para el supuesto de que el nuevo cauce sea el resultado de un movimiento brusco de las aguas, la doctrina nacional, coincide en la ausencia de un principio regulador. Es por ello que la Corte Suprema de Justicia de la Nación por aplicación de los principios generales, ha resuelto que en este caso también debe reconocerse la propiedad del cauce desecado al ribereño. (doctrina de Fallos 175:183). Sin embargo, en este supuesto se ha reconocido, en función del Art. 2644 del C.Civil, que el ribereño interesado puede efectuar las obras necesarias para volver el río a su cauce anterior.

Los motivos de justicia que llevan en el caso del movimiento lento de las aguas, a respetar el terreno acrecido por uno de los ribereños, no alcanza a esta hipótesis que modifica el esquema y puede resultar efectivamente dañosa.

De todos modos, vuelto o no a su cauce primitivo el caudal, deben respetarse los derechos del Estado respecto del lecho, el que deberá determinarse en el caso de nuevo cauce, una vez acreditado el nivel máximo de las aguas en sus crecidas ordinarias.

En lo que se refiere al desplazamiento de arenas o sedimentos, en cauces que no tienen desplazamientos, es dable distinguir según se trate de partículas que naturalmente o imperceptiblemente se desplazan, del caso en que se produce un desprendimiento súbito de terreno que se desplaza y agrega a fundo extraño.

En el primer supuesto (caso de desprendimiento imperceptible) la acción de la naturaleza se denomina aluvión y queda reglamentada por el Art. 2572 del C.Civil. Este artículo considera el aluvión formado en los ríos navegables de propiedad del Estado y asigna a los ribereños particulares los aluviones producidos en ríos no navegables. Desafortunadamente el C.Civil adoptó una regla inadecuada por cuanto debió imponer como sistema la propiedad en favor del ribereño en todos los casos.

El ribereño, sin embargo, no puede hacer suyo el aluvión si existe en el límite

Cuando se produce un movimiento brusco que determina el desprendimiento de una parte importante de terreno, nos encontramos con el fenómeno de la avulsión, que está regido por el Art. 2583 del C. Civil; conforme al cual la propiedad de la porción en cuestión, es reivindicable mientras no se produzca adherencia al nuevo fondo en que recuesta. Si tal adherencia se ha producido, la propiedad corresponde al propietario ribereño que ha acrecido.

Con respecto al aluvión, es aún necesario realizar algunas aclaraciones. Son estas las que se vinculan al aluvión que se produce en forma natural pero por efecto de las obras o trabajos públicos que se realizan. No hay disposición legal especial, pero en la doctrina se reconoce que, por aplicación de principios similares, el terreno aluvional queda de propiedad del Estado o puede cederse al concesionario de la obra, si así se decide.

Cuando el río está canalizado, la circunstancia de que las riberas hayan sido trabajadas, hace que el Art. 2574 C. Civil, disponga de la propiedad en favor del Estado, quien podrá cederlo al concesionario, si en el acto correspondiente se decide ese temperamento.

Finalmente, corresponde destacar que en las aguas durmientes, no se reconoce aluvión, por faltar el transporte necesario de partículas en razón de la ausencia de corrientes.

El aluvión o la avulsión corresponde al Estado Provincial en los casos que hemos dejado expuesto, cuando se trata de sus costas, pero cabe preguntarse en los supuestos en que el Estado Nacional realiza la obra, si debe modificarse ese postulado.

Estimamos que el terreno resultante no pierde su característica de bien provincial, por efecto de que la Nación haya intervenido en la construcción. Esto, por lo que conforme con los principios que proyectamos, las obras acceden al cauce en que se encuentran como bienes del dominio público y no se concibe que no mantengan el carácter de públicos los aluviones o la avulsión que se produzcan junto a obras del dominio público provincial.

El Estado Nacional tendrá un derecho de crédito en su caso, contra las provincias afectadas, pero no alcanza ello a modificar el dominio público local.

4.1.1.2. - Análisis de la legislación vigente: Estudio de las normas que deben ser consideradas en relación al anteproyecto de Código.

4.1.1.2.1 - DISPOSICIONES FEDERALES

a) La Constitución Nacional.

Por razones de conveniencia expositiva, tendientes a facilitar la comprensión de los temas por parte del lector, presentaremos en primer término el derecho federal; vale decir el conjunto de normas que por su origen constitucional tienen su prema vigencia en el territorio de la provincia. Las normas de la Constitución Argentina, a más de limitar las esferas de acción del gobierno nacional y provincial, establecen principios de política hidráulica que ninguno de los dos gobiernos pueden abandonar y que por ello condicionan las posibilidades de realización.

Un ejemplo de norma constitucional de cumplimiento inexcusable es la que señala el Art. 26 referente a la libertad de navegación de los ríos. Ello supone que si bien la autoridad estará facultada para reglamentar la forma de esa navegación, tendrá dificultades para efectuar una obra que impida el cumplimiento del mandato constitucional. Esa libertad de navegar está garantizada además por el principio de gratuidad establecido en el Art. 12, el que prohíbe cobrar gabelas por el libre tránsito autorizado.

Consecuente con el principio de derecho internacional sentado, la Constitución en su Art. 14 reconoce el derecho a navegar que tienen los habitantes del país, sean nacionales o extranjeros.

i) - La Navegación es de jurisdicción Nacional.

Las normas que hemos expuesto indican que el primer problema que presenta el aprovechamiento de un río es el de realizar las obras de modo de no lesionar los derechos protegidos.

En los casos de ríos que no conectan sus aguas con otros cauces internacionales, una cuidadosa interpretación constitucional podría llevar a afirmar que la navegación es libre mientras las obras lo permiten a los propios nacionales, pero que tal principio no pueda aceptarse cuando el aprovechamiento adecuado del río, impone sacrificar su navegación en beneficio del nuevo uso.

Sin embargo, en los casos contrarios en que el río signifique un camino de acceso a otras naciones, está claro que los intereses extranjeros afectados perseguirían la aplicación de nuestro propio texto constitucional (Art. 26) o la regulación internacional del río. Como el Art. 67, Inc. 9, atribuye al Congreso el reglar la libre navegación de los ríos interiores, y también (inc.12) el comercio marítimo con las naciones, los autores nacionales han entendido en forma unánime, que es del resorte del gobierno nacional la jurisdicción sobre los ríos navegables y que en consecuencia, le corresponde resolver conforme los principios de derecho internacional las dificultades que la construcción de una obra pueda producir en la navegación de los ríos y por ende en las relaciones con los demás países.

La fórmula que en general adopta nuestro país, es la de obtener un común acuerdo con los países afectados, u obras en común para evitar contraposición de interés.

ii) - El aprovechamiento Hídrico es de Jurisdicción Provincial.

Pero sí es ortodoxo sostener que corresponda a la jurisdicción federal el resolver respecto a la navegación de los ríos, de ello no corresponde colegir que la provincia quedará excluida de toda intervención, en lo que al aprovechamiento de los mismos con carácter internacional se refiere.

La afirmación que efectuamos encuentra sustento abundante en las opiniones jurídicas del país y amplio reconocimiento de la legislación. Por el sistema que la Constitución crea, las Provincias se han reservado todos los derechos que no han de legado expresamente en la Nación. (Art. 104). Siendo ésto así, y recordando que las provincias preexisten antes de la organización nacional, es evidente que ellas mantienen el dominio sobre todos los bienes que constituye su patrimonio natural. Es por efecto de estos principios que el Art. 2340 del Código Civil en su enunciación principal reconoce del dominio público de los estados particulares (Provincias) los ríos y sus cauces, comprendidos dentro del límite provincial.

Si el Código Civil reconoce la propiedad pública de la Provincia sobre sus ríos y si tal punto de partida comúnmente admitido ha permitido que la mayoría de las provincias argentinas establezcan legislaciones especiales para regular el aprovechamiento de sus ríos, no se advierte que pueda el Gobierno Federal disponer del patrimonio provincial al suscribir tratados que impongan un uso determinado, sin consulta del interés local.

Algunos autores han propugnado la decisión exclusiva de la Nación, en base a que el Art. 67. Inc. 19 encomienda al Congreso el aprobar los tratados con las naciones extranjeras que el P.E. Nacional suscribiera (86 inc.14 C.N.). De allí deducen que siendo la autoridad encargada de la política internacional la autoridad federal, ella tiene facultad bastante para resolver sobre los derechos que el tratado reconozca o regule. Esto contradice con el espíritu del ordenamiento constitucional. La conducción de la política exterior no puede en modo alguno desconocer los derechos de las Provincias como tampoco podría desconocer los derechos de los particulares. Enfrentados a ese desconocimiento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación es el tribunal competente para intervenir en instancia originaria en la solución de cualquier conflicto que por este efecto se plantee.

Sin embargo, la queja judicial podría perturbar el desempeño del gobierno Federal en el plano internacional. Por ello es más recomendable propiciar la oportuna coordinación entre las partes interesadas en el orden interno, permitiendo la Nación, a su tiempo, que la Provincia participe en la estructura e instrumentación de los tratados de carácter internacional, cuando afecten el patrimonio hídrico de la Provincia.

iii) - Facultades de la Provincia.

Si los intereses provinciales no son reconocidos por la Nación en oportuni-

dad de suscribir algún tratado con una potencia extranjera, la Provincia podrá manifestar su oposición mediante la denuncia de los compromisos o adhesiones que hubiera concertado con el Gobierno Federal, en materia de aguas u aún en otras materias, en las que por lo demás no siempre encuentran adecuado tratamiento los derechos locales. Este tipo de sanción resulta idóneo para resolver las dificultades o desconocimientos que el obrar federal pueda producir.

Es más. La Nación no detenta con exclusividad el desarrollo de las relaciones exteriores. El Art. 107 de la Constitución Nacional dispone que las provincias pueden celebrar tratados parciales para fines de intereses económicos y si bien los constitucionalistas han entendido que dicha facultad solo puede emplearse entre las mismas provincias, esa interpretación no encuentra sustento en el texto de la Constitución que se limita a señalar que mientras sean "tratados parciales" y no tengan carácter político (Art. 108) las provincias pueden comprometerse.

Mantener la concepción limitada, favorable a la exclusiva intervención nacional en los tratados, implica desconocer la posibilidad de que las provincias realicen compromisos de carácter económico con oficinas internacionales de otros países e incluso con la Nación misma. En todos los casos, los tratados deberán ser puestos en conocimiento del Congreso, conforme lo exige el Art. 107 de la C.N.

Cumplido el requisito, la Provincia está en condiciones de suscribir tratados sobre aprovechamiento de aguas, dejando a salvo los derechos federales que hacen al derecho de policía internacional, y el respeto de las normas sobre navegación. La posibilidad de ejercer esta facultad no implica la conveniencia de su efectivo uso. Razones de conveniencia política pueden aconsejar la más de las veces el delegar en el gobierno central la celebración y ejecución de los instrumentos de carácter internacional, siempre que dicha delegación no implique el descuido de legítimos intereses locales.

La provincia encontrará propicio sin embargo el suscribir o adherir a compromisos de financiación de estudios u obras de relativa magnitud en los que el gobierno federal esté conteste con su realización.

La coincidencia de interés que puede obtenerse ya fue puesta de relieve por la misma Constitución, al indicar como tarea concurrente de la Nación y de las provincias, la realización de canales navegables. (Inc.16 Art.67 y Art.107) y la tarea de explotar sus ríos con las implicaciones de controlar su aforo, regular su aprovechamiento y tareas o trabajos semejantes.

La definición de nuestro sistema político en favor de un ordenamiento federal ha provocado la existencia de dos gobiernos (el federal y el local) sobre un mismo territorio, con atribuciones propias en general pero a veces concurrentes. La duplicidad en las funciones ha sido impuesta como una forma prudente de hacer coincidir los intereses generales de la Nación con los particulares de las provincias. El asentamiento de las instituciones ha permitido demostrar la conveniencia del sistema y la eficacia con que ha logrado su objetivo en la práctica.

Las condiciones de hecho determinan, en definitiva, el más conveniente accionar en la materia que nos preocupa. Para definir ese accionar la Provincia debe concretar las metas y objetivos, orientando hacia ellos su gestión. En la definición del programa de promoción agropecuaria, de cuya primera etapa esta relación forma parte, podrá encontrarse una adecuada fuente de información para gobernantes y funcionarios. Por ahora, basta dejar delimitado el territorio en que la provincia puede desempeñarse conforme con las normas vigentes, y sin perjuicio de que la misma Provincia materialice en su legislación local las leyes ordenadoras de su gestión futura.

b) - Los Códigos Nacionales.

Para concluir el análisis de las disposiciones de carácter constitucional que se vinculan al tema del agua, nos es indispensable referirnos al principio de codificación única por el Congreso de la Nación, de las llamadas legislaciones de fondo. Este principio junto a la exigencia de que los textos constitucionales provinciales no contradigan el texto nacional, completan la revisión de normas constitucionales que a la materia en exposición se vincula.

Quando se habla de codificación única se expresa la delegación que las provincias efectúan al Congreso para que este redacte las leyes nacionales.

ren a las materias civil, comercial, penal, minera y, desde la reforma de 1957, a las relaciones del trabajo. Por efecto de esta delegación (Art. 67 Inc. 11) las provincias no pueden legislar tales supuesto, los que quedaron en expreso vedados a su intervención (Art.108).

La atribución federal ha sido indiscutida por las provincias, las que han tropezado sin embargo con la necesidad de atenerse a la tradición jurídica para delimitar la esfera de regulación de "lo civil" "lo comercial" etc.. La Constitución al referirse a tales conceptos ha adherido al sentir tradicional de los juristas, aceptado lo recibido en los códigos dictados en países de mayor desarrollo científico del quehacer jurídico, pero no delimitó las materias que dentro de los conceptos civil, comercial o penal, pudieran quedar comprendidos.

Esa deficiencia hubo de provocar una consecuencia más desafortunada. Las legislaciones civiles de formación europea, en que los problemas del federalismo no existían, incluyeron en la legislación civil la determinación de los bienes que se encontraban en el dominio público. Al tener en cuenta ese ejemplo, los constituyentes no se preocuparon de incluir en el texto de la ley suprema el detalle de los bienes que se consideraban públicos de las provincias. Esta omisión relegó el problema al codificador civil, quien conforme los principios de la propia constitución, estableció la enunciación general de los bienes públicos en el Art. 2340, aclarando que corresponden a las provincias los situados dentro de sus territorios. Vélez Sarsfield supo respetar así los derechos provinciales, que fueron aceptados por la ley Nacional pero que no alcanzaron la suerte de verse reconocidos en el mismo texto constitucional. Es por efecto de esa ausencia que el congreso federal pudo transferir en 1958 los yacimientos de hidrocarburos que se encontraban en el dominio privado de las provincias conforme al Código de Minería y la ley 12.161, al dominio público de la Nación, desconociendo con ello, la práctica constitucional de antiguo establecida.

Sea como fuere, el Código Civil ha reconocido que corresponde a los estados particulares el dominio público de los ríos, sus cauces y todas las aguas que corren por cauces naturales (Art.2340 Inc.3). Con tal declaración, la Nación ha sabido respetar los derechos que sobre tales bienes preexistían y que las provincias no habían delegado.

Por efecto de esta disposición civil y fundándose en el ejercicio de los poderes no delegados, las provincias dictaron leyes de regulación sobre su patrimonio hídrico, tanto en lo que se refiere a su utilización directa por la administración como al uso que del agua pudieran hacer los particulares.

Corrientes, al par que las demás provincias, estableció un estatuto particular en el libro III del Código Rural que se destinó al régimen de aguas y rige en el territorio provincial desde 1902. El Código respeta el sistema de concesión administrativa para las aguas del dominio público provincial destinadas al aprovechamiento particular, con lo que cumplimenta los Arts.2341 y 2642 del C.Civil que imponen esa modalidad. El ámbito territorial de aplicación de éste código, está delimitado por la Constitución Provincial, cuya última reforma data de 1961. Al tratar el derecho provincial volveremos sobre estos textos locales, anticipando aquí que el establecer los límites provinciales ha sido tradición del constitucionalismo de las provincias, pese a lo dispuesto en el Inc. 14 del Art. 67 de la C.N. en el sentido de atribuir al Congreso el fijar los límites de las provincias. Esa determinación ha sido admitida para los casos de litigios interprovinciales, con lo cual se cumple el postulado de identidad de principios que exige el Art. 5 de la Constitución Nacional, para admitir la vigencia de la Constitución Provincial.

Con lo que ha quedado expuesto hemos descripto las normas de la Constitución Nacional que tienen vinculación con el problema del agua. En la revisión efectuada, hemos dejado sin comentario el Inc. 16 del Art. 67 de la C.N. que se vincula a las facultades del Congreso para proveer lo conducente a la prosperidad, adelanto y bienestar de las provincias, como también a la exploración de los ríos interiores, por tratarse de facultades concurrentes que hubimos de explicar con especial énfasis para el quehacer provincial. Tal énfasis está justificado cuando se advierte que en esta zona de poderes compartidos encuentran algunos autores fundamento bastante para su teoría de los derechos implícitos, con la que invariablemente se desconoció el equilibrio natural de las instituciones constitucionales, con evidente perjuicio para las atribuciones provinciales.

Hemos anticipado que el Código Civil, en razón de principios de la Constitución, ha establecido cuáles son las aguas que corresponden al dominio público de los estados Provinciales y ha dispuesto el sistema de concesión administrativa para las mismas, cuando se dispusiera su aprovechamiento por los particulares. A más de esa normatividad, el Código, conforme los principios civiles determinó las aguas que deben considerarse del dominio privado, estableciendo respecto de ellas las restricciones que sobre las mismas pesan.

Conforme tales normas legales, los autores han clasificado las aguas, de acuerdo con el tratamiento legislativo acordado por la forma de su presentación en la naturaleza. Sobre las que se consideran públicas recae la legislación provincial, cuando como dijimos, se encuentran en el territorio provincial.

Las aguas privadas son normadas por el Código Civil y se someten a la legislación provincial al único efecto de recibir un tratamiento adecuado en lo que a la policía de tales aguas se refiere.

i) - Normas sobre Esteros y Lagunas.

Si bien las opiniones jurídicas no coinciden en razón de la distinta interpretación que del Código Civil se realiza, se consideran privadas: las aguas que nacen y mueren en un mismo fundo (Art. 2350 C.C.); las aguas de lluvia caídas en lugares privados (Art. 2635 C.C.); las aguas que brotan en terrenos privados (Art. 2637 C.C.) aunque se discute el carácter privado o público del caudal que dichas aguas forman. Se consideran también privadas todas las aguas que no se desplazan en el terreno, a las que se denomina durmiente o dormidas, por carecer por sí mismas de movimiento apreciable, como el que puede advertirse en ríos o arroyos.

La falta de movimiento apreciable permite considerar a los bañados y esteros en el dominio privado. Por bañado, el Diccionario de la Real Academia define el terreno húmedo, a trechos cenagoso y a veces inundado por las aguas pluviales o por la de un río o laguna cercana. Dicho término es equivalente de estero en la terminología del país.

Algunos autores argumentando en el caso con la circunstancia de que algún movimiento existe en las aguas de bañados y esteros, han pretendido que tales terrenos podían considerarse en el dominio público también las lagunas y los lagos.

Esa interpretación no ha sido aceptada. Por expresa disposición del Inc. 5 del Art. 2340, corresponden al dominio público los lagos y lagunas cuando son susceptibles de navegarse por buques de más de 100 toneladas.

No siendo ese el caso, tales aguas corresponden al dominio privado. Por lo que queda expuesto, la administración deberá proceder a determinar en cada caso el carácter de bien público o privado de las aguas, resultando de esa determinación, la propiedad particular o estatal respecto del cauce.

ii) - Aguas subterráneas.

Las aguas que no corren por la superficie (subterráneas o freáticas y subterráneas) se consideran por la mayoría de los autores regidas por el Art. 2518 C.C. por lo que se estiman privadas. Hay autores que la consideran públicas cuando corren en forma subterránea, pero a tal criterio se ha señalado que a más de contrariar la nota del codificador, es físicamente difícil establecer cuando las aguas corren o se detienen.

iii) - Cursos de aguas interiores y limítrofes.

Se declaran del dominio público del Estado, fuera de los casos antedichos, a todas las aguas que corren por sus cauces naturales dentro del territorio Provincial, siempre que no nazcan y mueran dentro de un mismo fundo (Art. 2340 Inc. 3 C.C.). Quedan incluidos en esta declaración a más de los caudales del río Paraná y Uruguay que por los tratados internacionales corresponda al país, los ríos y arroyos situados en los límites que indica la Constitución Provincial, o que una ley del Congreso pueda determinar. Las aguas de lluvias que caen en predios del dominio público se entienden "res nullius", susceptibles de aprehensión por cualquiera (Art. 2636 C.C.).

El Código Civil reconoce como constituyendo parte del dominio público a los cauces o lechos de las aguas consideradas públicas, hasta la línea de ribera, que es

natural provocaría incontables dificultades en la práctica por cuanto la naturaleza por su propia acción no fija un deslinde satisfactorio. Es por ello que se reconoce que la Administración debe proceder a su determinación precisa, mediante una operación técnica fundada en la observación constante de las aguas. La línea de ribera en cuestión, o línea de cota, se fija en los ríos navegables por el Estado Nacional, en razón de la jurisdicción que respecto de la navegación le compete, pero puede ser fijada por la autoridad administrativa provincial si la Nación no lo ha hecho y debe realizarse en los ríos no navegables exclusivamente por las provincias, en razón de que le compete jurisdicción sobre los mismos.

Esta línea de ribera es esencial por cuanto distingue el dominio público del Estado del dominio particular. El desconocimiento de este derecho provincial hace presumir a los titulares de fundos que contienen caudales que corren, que son los titulares también de los cauces por los que tales aguas circulan. Esa creencia es injustificada y no tiene sustento jurídico alguno.

La determinación de la línea de ribera concreta el derecho de propiedad sobre el terreno que habitualmente cubren las aguas en favor del estado provincial. Por efecto de esa fijación, que puede ser impugnada, el Estado local está en condiciones de asentar sobre el lecho que en propiedad le corresponde, la obra o instalaciones que su plan hidráulico le imponga. Las obras que superen la línea de ribera indicada, provocarán la necesaria expropiación del terreno ocupado o el establecimiento en el lugar de una servidumbre administrativa de presa.

Al exponer las soluciones a los distintos intereses comprometidos por la realización de obras hidráulicas, hemos ampliado estos conceptos indicando las soluciones legales. Baste decir por ahora, que las crecidas extraordinarias no pueden ser tomadas en cuenta para la determinación del límite entre el dominio particular y el público, por cuanto el Art. 2577 de C.C. ha dado como límite del lecho del río, la línea a la que llegan las más altas aguas en su estado normal.

También más adelante trataremos los efectos que producen las fuerzas naturales o el obrar humano, en el régimen de dominio privado y público.

El Código Civil establece algunas restricciones al dominio fundadas en el mejor aprovechamiento hidráulico. Impone así el llamado camino de sirga que consiste en que el titular del dominio soporte en una extensión de 35 metros de su fundo vecino a un curso navegable el uso de esa área en favor de la navegación. Con idéntico alcance de restricción se establece la obligación de recibir las aguas que provengan de fundos superiores en las condiciones de los Arts. 2646 a 2653 del C.C.

La ley civil señala también las servidumbres que pueden establecerse en razón del uso del agua. Ella son legisladas en el Título XIII del Libro III, en las siguientes modalidades: de acueducto (Art. 3082); de recibir aguas artificiales provenientes de riego o uso en establecimientos industriales (Art. 3097 a 3099); de avénamiento (Art. 3100); de recibir aguas de techos vecinos (Art. 3092 a 3096), y de saca de agua (Art. 3104 a 3107).

c) - Otras Leyes Nacionales.

Hacia 1891 se sancionó la ley 2797 que perseguía obtener la purificación previa de las aguas cloacales o utilizadas por la industria, antes de ser volcadas a los ríos de la república. El propósito sanitario que albergaba esta ley, hizo olvidar a los legisladores que una disposición de tan amplio alcance vulneraba las atribuciones de carácter local.

Poco después en 1894 se dictaba el Código Rural para los territorios nacionales, el cual disponía sobre el uso de las aguas públicas en los citados territorios, entonces administrados por el gobierno nacional. En dicho cuerpo legal se establecía una autoridad de aguas en manos de un Inspector General de agricultura, derivándose las cuestiones contenciosas a un juez de aguas que debía designarse por cada canal de riego. Estas atribuciones fueron ejercidas a través de funcionarios del gobierno federal, dependientes de la Dirección de Irrigación, organismo que después formó parte de Agua y Energía Eléctrica.

La legislación en cuestión no se aplica actualmente, dado que su vigencia ha quedado limitada al territorio de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur, en donde, por lo demás, no existe aprovechamiento hidráulico actualmente.

La ley 3.445 se vincula a la policía de navegación que corresponde a la Nación, organizando la prefectura general de puertos. De sus disposiciones merece destacarse el Art. 7 que se refiere al cumplimiento de las disposiciones sanitarias en los puertos y a la remoción de los obstáculos accidentales que entorpecen la navegación.

Estas normas que mantienen su vigencia, a través de disposiciones reglamentarias actuales, encuadran en la tarea que corresponde al quehacer federal, en cuanto a navegación de los ríos se refiere.

La ley 3.445 fue sancionada en 1896 y se publicó en el Registro Nacional de ese año, en el t.II p.626.

La más importante de las leyes de aguas de la Argentina es la que lleva el N° 6546 y fuera sancionada en 1909. En ella el Gobierno Nacional mediante la adhesión de las provincias, procedería a realizar, por sí o por medio de las compañías ferroviarias que lo deseen, las obras destinadas a aprovechar caudales hídricos que la ley indicaba y que no incluía ninguno del régimen de la provincia de Corrientes.

Mientras las obras no fueran amortizadas, el Gobierno Federal conservaría la administración del regadío y el cobro del cánón de agua, dentro del cual se incluía la amortización del capital, los intereses, y los gastos de conservación y explotación.

Abonado el capital, las provincias recibirían el dominio y administración de las obras, sin cargo alguno.

La ley 6545 fue reglamentada por decreto del 2 de abril de 1910, el que fue a su vez modificado por decreto N° 8459 de 26 de agosto de 1936. La ley produjo sus efectos. El Ferrocarril del Sud ejecutó entonces en el alto valle del Río Negro obras de riego, con las que produjo una profunda modificación en la estructura económica de la zona. También la Nación hizo llegar su esfuerzo a las provincias mediterráneas, con lo que quedaron finalmente bajo su gestión aprovechamientos existentes en las provincias de Catamarca, Salta, Jujuy, San Luis, La Rioja, Neuquén y Río Negro, algunos de los cuales, se desea pasen a la jurisdicción de las provincias.

Pero la disposición que efectivamente regula el uso del agua, es la del Art. 16 de la ley, que autoriza al P.E. a dictar reglamentos que debían adecuarse a los principios de la ley y del Código Civil.

Tales reglamentos que fueron dictados por la Dirección de Irrigación del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, fueron reunidos en un texto único en 1960 por la Gerencia del Agua, de Agua y Energía Eléctrica de la Nación, empresa de Estado que vino a suceder a la antigua Dirección de Irrigación, y a cuyo cargo se encuentra ahora la administración de los servicios, a la espera de la oportunidad de devolver los mismos a las provincias.

En orden cronológico y dejando de lado las disposiciones sobre suministro de agua potable y otros servicios sanitarios, se encuentra la sanción del Art. 182 del Código Penal (Ley 11.179) que incrimina entre los delitos contra la propiedad el uso ilícito y doloso de las aguas públicas o privadas.

Excediendo el marco que la constitución le ha fijado al Congreso, la ley 11709 sancionada en 1933 autorizó al P.E. Nacional a imponer la instalación y cuidado de escalas de pecos en los diques construídos o a construirse. Para justificar la medida en su faz legal, la ley permite el ejercicio de esta facultad, sólo en los ríos de jurisdicción nacional. La disposición encuentra justificativo práctico en la necesidad de permitir que los pecos remonten el río y produzcan los desoves en los tiempos apropiados, en la actualidad los conceptos modernos han impuesto que en toda obra de aprovechamiento hidráulico se contemple el aspecto que la ley cuida.

En el análisis que realizamos, no podemos dejar de mencionar la creación de la Administración Nacional del Agua, por decreto ley 33425, en la que se refundieron la Administración General de Obras Sanitarias y la Dirección General de Irrigación. Ya hemos anticipado que esta última Dirección pasó a integrar posteriormente la Empresa Agua y Energía Eléctrica.

Es por gestión de esa Administración Nacional de Aguas que el 24 de marzo de 1945 se firmó el decreto 6767, conforme con el cual el P.E. Nacional se arrogaba las facultades de regular el uso y aprovechamiento de las aguas y corrientes subterráneas que corrieran en zonas limítrofes interjurisdiccionales. En los considerandos de

ese decreto, que adquirió jerarquía legal posteriormente (ley 13.030), se sostenía ^{4/13} que la falta de disposiciones constitucionales expresas y el fracaso de los acuerdos interprovinciales sobre uso de ríos justificaban la medida.

Pero la disposición que con más fuerza quebranta el régimen de los derechos constitucionales de las Provincias sobre sus ríos, es la que impone la jurisdicción federal sobre el aprovechamiento hidroeléctrico. (Art. 6 de la ley de Energía N° 15.336).

Para que este postulado no agrave en forma total los intereses provinciales la ley de Energía (Art. 5) se preocupa de señalar que las fuentes hidráulicas producen energía al precipitarse en caídas de agua y que el uso de tal energía no implica desconocer el uso y aprovechamiento diferente que hasta el momento de la construcción de la obra hidráulica se estaba efectuando. Con este concepto se pretende mantener el respeto por el riego u otra utilización que las provincias le hubieran conferido a un determinado curso de agua, si bien el mismo artículo reconoce que la prioridad en el uso está establecido en relación al aprovechamiento hidroeléctrico.

El tipo de disposición que comentamos parte del equívoco de suponer que los intereses provinciales deben oponerse en forma terminante a los intereses nacionales, a más de que se interpreta que permitir la participación provincial en los proyectos implica admitir demora en el procedimiento y postergación en los planes. El concepto es esencialmente equivocado, por cuanto es en general por la insistencia de los intereses locales sobre el poder central que puede lograrse materializar las iniciativas, dejando aparte por un momento la consideración de las múltiples obras eléctricas y de irrigación que las provincias han encarado con su propio esfuerzo económico.

Consecuente con la jurisdicción federal que la ley impone el Art. 7, autoriza al P.E. Nacional a promover en cualquier lugar del país la captación de energía hidroeléctrica. Cuando por efecto de una captación se produzca el trasvase de una cuenca fluvial afectando los intereses de más de una provincia, el trasvase en cuestión deberá ser autorizado por ley nacional. Con esta última solución se quebranta la posibilidad de que las provincias produzcan sus propios tratados con la Nación o con sus iguales, abandonándose la correcta interpretación constitucional que analizaremos al tratar las regulaciones de carácter interprovincial que en materias de aguas se aconsejan.

En otra disposición (Art. 9) se faculta al gobierno federal a utilizar y regular las fuentes de energía. Como en el concepto de fuente de energía se encuentra la fuerza que el deslizamiento del agua provoca, resulta que por efecto de esta norma queda desconocido el derecho de dominio sobre las aguas públicas reconocido por el Código Civil en favor de las provincias, quienes necesariamente encontrarán sus normas en colisión con la legislación energética en cuestión.

La abundante literatura jurídica que se ha difundido sosteniendo la inconstitucionalidad de muchas de las disposiciones de la ley hace innecesario reiterar aquí tales conceptos, los que se han señalado en su especial referencia a los aspectos que interesan al quehacer hídrico en la provincia.

A instancias del diputado Miguel Gili se sancionó la ley 15.729 por la cual se sigue la tendencia favorable a la intervención del estado federal no sólo en el proyecto y construcción de obras hidráulicas en los ríos interprovinciales, sino también en lo que a su aprovechamiento hidráulico y energético se refiere, aspecto este último de colisión constitucional. En la ley citada se autoriza al P.E. de la Nación a realizar el estudio y proyecto de las obras necesarias para asegurar la navegación regular en el Alto Paraná y el aprovechamiento de ese mismo río ~~que~~ ^{guay.} La iniciativa, que permitía al P.E. negociar títulos de la deuda pública para solventar los gastos que el cumplimiento de la produciría, tenía a la vista la posibilidad de concretar algunos estudios particulares que han tenido difusión en el país y que se vincula a la construcción de una serie de dique, en distintos kilómetros del río Paraná y la consecuente utilización de la laguna Iberá como reguladora del caudal del río.

La falta de debido apoyo por parte del gobierno federal, ha dejado a la ley sin aplicación alguna.

Otras leyes de menor interés, como la ley 15724 que dispone obras de irrigación en Santiago del Estero, no se reseñan por carecer de interés a los efectos de

4.1.1.2.2. - Disposiciones de Carácter Interprovincial.

Al precisar las normas de carácter nacional, tuvimos la oportunidad de señalar que el dominio de las aguas correspondía a las provincias y que a ellas también le correspondía la jurisdicción, excepto en el caso que fueran navegables supuesto en que cabía la jurisdicción federal, en razón del fenómeno de la navegación, el comercio que por efecto de ella se produjere y la gestión de relación internacional que al Gobierno Federal le corresponde por razones constitucionales.

La propiedad de las aguas señalada establecida por el Código Civil es principio incontrovertible de nuestro derecho respecto al cual los autores no tienen discrepancia alguna. Sin embargo, existen discrepancias respecto de la posible regulación - que ellas pueden hacer de los caudales que en propiedad le corresponden.

Algunos autores sostienen que el Congreso está facultado para reglar el aprovechamiento de las aguas interprovinciales navegables, en cumplimiento de la enunciaci3n del preámbulo sobre uni3n nacional, paz interior y bienestar general y por efecto de la cláusula comercial de la Constitución (Art. 67 Inc. 12) que permite reglar el comercio interprovincial. La mención del preámbulo no se refiere según se ha señalado a los poderes del Congreso de la Nación, por lo que a más de definir una orientaci3n general de los constituyentes, es insuficiente para justificar el actuar federal.

Por tal motivo, una corriente doctrinaria se ha orientado en el sentido de negar toda regulaci3n federal en el aprovechamiento del río interprovincial salvo los supuestos de navegaci3n o comercio interprovincial. Para este criterio la regulaci3n del caudal debe efectuarse por tratados interprovinciales, estimándose en tales casos que respecto de las aguas existe un condominio entre las provincias y que respecto del cauce, el mismo se entiende corresponde por mitades, en proporci3n a los límites que las Provincias se hayan mutuamente reconocido. Las aguas se admiten en situaci3n de condominio en raz3n de que su condici3n natural tornaría inconveniente la divisi3n material de la misma, divisi3n que es susceptible de realizarse en el cauce.

En lo que a las aguas interprovinciales no navegables se refiere, todas las opiniones coinciden en el sentido que tanto la jurisdicci3n como el dominio de las mismas corresponden a las provincias en que se encuentren o cruzan. Sin embargo los sostenedores de la tendencia favorable a la legislaci3n federal integral de los ríos, estiman que en este supuesto de aguas no navegables, se aprecia la ausencia de un estatuto que regule su utilizaci3n. Para justificar esta creencia y extendiendo el concepto a las aguas navegables, afirman que el Congreso ya ha regulado en forma parcial las aguas indicadas al establecer por los Arts. 2645 y 2646 del C.C. que est3 prohibido el represar las aguas o el detenerlas en perjuicio de los propietarios de los fundos de agua abajo.

Contra tal criterio, se ha afirmado que tales normas se vinculan al capítulo de las restricciones al dominio de los particulares y que, por lo demás, si no fuera así, resultarían inconstitucionales.

La tesis favorable a la regulaci3n por tratados interprovinciales de las aguas ha ganado terreno en el derecho argentino. Las provincias de Mendoza, Neuquén, Buenos Aires, La Pampa y Río Negro, acordaron reconocer que es de exclusiva jurisdicci3n de ellas el reglar el aprovechamiento integral de las aguas no navegables del río Colorado, afirmando su potestad para convenir su aprovechamiento entre ellas sin intervenci3n del Gobierno Federal. También declararon que en caso de litigio y por raz3n del Art. 100 de la Constitución, corresponde a la Corte Suprema de Justicia de la Naci3n el intervenir en instancia única y originaria. Estas afirmaciones, vertidas en oportunidad de la Conferencia de Santa Rosa del 29 de agosto de 1956, han plasmado en un convenio interprovincial que ha dado bases para el común manejo del río. En tal acuerdo se dispuso la creaci3n de la "Comisi3n Técnica Interprovincial Permanente del Río Colorado" que quedó encargada de materializar los estudios necesarios para permitir una más adecuada utilizaci3n hídrica.

Este tipo de organismo interprovincial, con atribuciones específicas referidas al desarrollo de caudales hídricos zonales, ha configurado un mecanismo de estilo regional, en el que a más de revitalizar la concepci3n federalista en el manejo de los recursos, ha localizado los estudios en funci3n de la identidad de situaciones - geográficas, con abandono del agrupamiento exclusivamente político, que era razonable

Es ejemplo de lo expresado la creación, el 14 de diciembre de 1956 del OIANA Organismo Interprovincial del Agua del Noroeste Argentino, ente creado por las provincias de Catamarca, Tucumán, Salta, Santiago del Estero, Jujuy y Formosa con el objeto de evaluar los recursos hídricos de la región y programar la forma de su aprovechamiento. La oficina en cuestión, financiada por el aporte conjunto de los estados miembros, tendría la oportunidad de satisfacer en forma adecuada las necesidades comunes del noroeste argentino.

Dentro del mismo sector se instrumentó poco después otro compromiso para regular el uso de los ríos Albigasta y Guayamba, que son interprovinciales. El acuerdo vincula a Catamarca y Santiago del Estero, provincias que el 1° de noviembre de 1957 establecieron la "Comisión Interprovincial del Agua Catamarca-Santiago del Estero" comisión que se individualiza con las siglas C.I.A.C.S.E.

Otro antecedente, si bien no de carácter exclusivamente local, es el de la Corporación Norpatagonia, que comprendía las provincias de Río Negro, Neuquén y Chubut. Mediante ese organismo de desarrollo, que no fue ratificado por las provincias, se perseguía por el gobierno de la Nación obtener un progreso efectivo de la región austral.

También para el Río Bermejo se trató en 1956 y 1958 de establecer un acuerdo interprovincial, pero tales gestiones no resultaron exitosas y el esfuerzo quedó limitado a la Nación, que estableció una comisión especial para proyectar las obras de navegación, riego y aprovechamiento hidroeléctrico necesarias. Tales obras serían sometidas a la consideración de las provincias en cuyos territorios se efectuasen.

4.1.1.2.3 - Disposiciones de carácter internacional.

En el análisis de las normas de derecho internacional que se vinculan a la relación que en análisis efectuados, es indispensable recordar las disposiciones del Tratado de Límites que fuera suscripto en 1876 con la República del Paraguay, por cuanto tales disposiciones condicionan los límites establecidos por la Constitución de la Provincia. Además es importante el recordarlos por cuanto tales disposiciones pueden afectar en forma directa los derechos de la provincia sobre el Apipé, o al menos perturbar el programa que a ese respecto pueda formularse.

El tratado en cuestión señala como línea divisoria la que corresponde a la mitad de la corriente del canal principal del río Paraná en la extensión que va desde su confluencia con el río Paraguay, hasta encontrar por su margen izquierda los límites del Imperio del Brasil.

El tratado declara de propiedad de la República Argentina la isla Apipé, y concede la Isla Yaciretá al Paraguay, siguiendo con ello el lineamiento trazado en el tratado de 1866. (Art. II).

En lo que se refiere a la isla del Cerrito, el tratado dispone que corresponde al dominio de la República Argentina (Art. III). Las demás islas pertenecen al país al cual se encuentran más adyacentes, procediéndose a tal determinación conforme las reglas del D. Internacional (J. A. t. 70).

Al desarrollar las normas de Derecho local, confrontaremos estas disposiciones con la corriente similar que expone la Constitución correntina.

Por tal situación geográfica que detenta, Corrientes tiene límites con tres de las cinco naciones limítrofes con la Argentina. Esos límites, por lo demás lo constituyen los dos ríos más importantes del sistema argentino del Plata. Por ese motivo Corrientes presenta la particularidad de que le son aplicables no sólo las normas sobre aguas interprovinciales, sino también las de regulación internacional.

En ese sentido, las posibilidades de aprovechamiento hidroeléctrico de los rápidos del Apipé, provocan la preferente atención del gobierno central y del Paraguay, con quienes se han establecido acuerdos para regular su uso común.

En febrero de 1926 se suscribió un Washington entre los representantes de la Argentina y del Paraguay un protocolo destinado a permitir el aprovechamiento del Salto del Apipé. Conforme a tal compromiso, la Argentina quedaba facultada a realizar las obras hidroeléctricas que estimare necesarias. Si en tales planes, la República del Paraguay deseaba cooperar, tendría derecho a utilizar el 7½ % del porcentaje de la fuerza hidráulica obtenida, si las obras se establecían en un lugar de ju-

Fuera del protocolo señalado, debemos recordar una norma esencial para el aprovechamiento de las aguas internacionales en Sudamérica. Es la convención suscrita en Montevideo el 24 de diciembre de 1933, en oportunidad de celebrarse en dicha ciudad la 7ª Conferencia Interamericana. En oportunidad de ese encuentro internacional, se acordó que en los ríos internacionales de cursos sucesivos, las obras de aprovechamiento industrial o agrícola que se realicen no deberán causar perjuicio a la libre navegación de los mismos, antes bien deben tratar de mejorarlos en los que sea posible. En este caso, el estado o los estados que proyecten la construcción de las ~~obras deberán comunicar a los demás el resultado de los estudios practicados en lo que se relacione con la navegación al solo efecto de que tomen conocimiento de ello.~~

Por lo que puede apreciarse, la principal preocupación de los firmantes de la convención en cuestión, es la de no perturbar el desarrollo normal de la navegación. Se omite en consecuencia el normar en modo adecuado, los otros modos de aprovechamiento que puedan implicar una disminución del canal hídrico en desmedro de los países de aguas abajo. Este tipo de disposiciones, en el caso de adoptarse, somete a los ríos, a un régimen internacional que supone la admisión voluntaria de todas las naciones a un sistema determinado.

La norma acordada en 1933 no impone la aprobación de las obras a realizar - por parte de los países interesados y ribereños del río, dado que se trata únicamente de poner en su conocimiento la existencia del proyecto, manteniendo eso sí las condiciones de navegación del río en estudio. Ese temperamento deberá adoptar la Provincia en el caso de promover aprovechamientos en los ríos limítrofes con las naciones extranjeras.

Para complementar la enunciación de antecedentes, es oportuna la mención - del Convenio tripartito Argentino-Boliviano-Paraguayo de 1941 que se refiere al establecimiento de una comisión encargada de efectuar estudios en el río Pilcomayo.

En orden cronológico debemos mencionar el Convenio suscripto en 1946 referente a la utilización por parte de nuestro país y del Uruguay del Salto Grande situado en el río Uruguay. Esa obra requerirá la intervención del Brasil, por cuanto es posible que la construcción afecte superficie territorial del citado país.

Finalmente en 1958 los gobiernos de Argentina y Paraguay suscribieron un convenio mediante el cual establecieron la Comisión Técnica Mixta Paraguay Argentina - del Apipé, que sería la encargada de estudiar el aprovechamiento de energía hidráulica de la zona de las islas Yaciretá y Apipé y complementariamente las mejoras que podrían producirse en la navegación del río Paraná. En dicha comisión no existe representación de la provincia de Corrientes, ni ha sido informados sus representantes.

4.1.1.2.4 - Disposiciones de carácter local.

a) - La Constitución Provincial.

El análisis de las disposiciones de carácter provincial que regulan el régimen de aguas, revela que en la Constitución Provincial no existen normas vinculadas al tema, posiblemente por las características locales de su geografía, regada en forma abundante por las aguas y favorecida por un régimen de lluvias abundantes.

La única disposición en que podemos detenernos es la del artículo 2 que fija los límites provinciales, y resulta indispensable para determinar el régimen al que quedan sujetos los ríos que sirven de frontera con los países vecinos o de simple límite con las provincias.

Las dificultades físicas que han existido para demarcar los límites con la provincia de Entre Ríos, y una antigua reserva de derechos efectuada con respecto al territorio en que ahora se encuentra establecida la provincia de Misiones, ha provocado que el texto constitucional, al referirse a los límites NOROESTE Y SUR, se señale a los mismos con la indicación escueta de que ellos son "los que por derecho le corresponde". En el límite Este, en cuanto no afecta la zona colindante con Misiones se fija como límite el río Uruguay y en el oeste el río Paraná. Aunque la Constitución local no se preocupa en especial por la propiedad de las aguas, la preocupación por resolver respecto de la propiedad de las islas ha llevado a los constituyentes a señalar que son provinciales las islas que se encuentran entre la costa y el canal de los ríos Uruguay y Alto Paraná, mención imprecisa esta última por cuanto exige deter

También declara como integrantes del territorio provincial las islas que aún cuando no reúnan la condición anterior, correspondan a la Argentina por tratados internacionales.

La misma norma se repite en lo que se refiere al río Paraná, con indicación que debe sumarse a las islas que se encuentran entre el canal principal y la costa correntina, las que se declaren tales por ley del Congreso o tratado interprovincial. Por lo que dejamos expuesto, puede advertirse que la Constitución ha guardado silencio, en lo que la propiedad del río en sí mismo se refiere. Los Constituyentes han guardado silencio con respecto a si debe admitirse de propiedad provincial el cauce del río, hasta la mitad del canal navegable y ha preferido solamente preocuparse por la determinación de la jurisdicción local en lo que a las islas se refiere. Esa ausencia está posiblemente orientada a permitir un avance aún mayor del concepto que sostiene el condominio de las aguas entre los estados ribereños y la propiedad exclusiva de la provincia del cauce, hasta la línea media del canal navegable.

Este último concepto resulta indiscutible en cuanto se refiere a las aguas internacionales no marítimas, que son las que marcan la frontera con los países vecinos. Los tratados internacionales firmados, que ya hemos citado, indican que tal es el límite que debe considerarse para delimitar los territorios de las naciones contratantes.

Hemos revisado las constituciones del Chaco, Santa Fé y Entre Ríos y hemos podido determinar que ellas no contradicen el texto correntino, aún cuando son tales provincias las que tienen con respecto a los ríos, problemas de determinación idénticas a los que caracteriza a Corrientes.

b) - El Código Rural.

Pero el conjunto principal de disposiciones que se vinculan al problema que analizamos, está contenido en el Código Rural de la Provincia, que fue sancionado el 19 de noviembre de 1902 y que correspondió al quehacer del Dr. Ernesto E. Ezquer.

En dicho cuerpo legal que consta de tres libros y un título preliminar, se ha dedicado todo el libro Tercero a la regulación del "REGIMEN DE AGUAS". Los dos primeros se dedican a la regulación de la vialidad y apropiación privada, el uno, y a la explotación del suelo, el segundo.

Las disposiciones de aguas, expuestas con perfecto estilo castellano, mantienen en la mayoría de sus disposiciones su lozanía inicial, en razón de que la fuente que más ha influenciado su redacción, es la ley de Mendoza de 1884, que a su vez ha tomado inspiración en la legislación española. El uso de tales antecedentes de eficacia probada en el tiempo, permite el mantenimiento de muchas de sus normas, las que por lo demás, no han tenido oportunidad de ser aplicadas, en razón de la abundancia de caudales, que ha permitido una adecuada satisfacción de las necesidades de los regantes quienes en el caso de los arrozales, no han tenido dificultades mayores en la provisión del líquido.

i) - Principios de Política Hídrica.

El Código Rural establece acertados principios de política hidráulica, si bien existen ausencias en lo que se refiere a la intervención de la Provincia en el aprovechamiento hidráulico de aguas internacionales no marítimas o aguas interprovinciales.

Dentro de los principios que destacamos -y que resultan aún aplicables a los supuestos que estimamos ausentes- el Art. 652 del C.R. caracteriza en forma conveniente la concesión de uso de las aguas públicas que por el C.Civil corresponden al dominio público de la Provincia. En el mismo se sientan tres postulados esenciales, a saber:

- a) Toda concesión se otorga con la cláusula "sin perjuicio de tercero". Esto implica el respeto de los derechos adquiridos antes de la misma.
- b) La concesión no lleva implícita la enajenación parcial del agua, sino que confiere al concesionario un derecho subjetivo de aprovechamiento. Este postulado se enuncia al indicarse "y salvo el derecho de propiedad", y
- c) La administración que concede no es responsable por la disminución o mengua del

Otro postulado esencial en materia de política hidráulica es el establecimiento de prioridades que efectúa el Art. 655 conforme al cual, en el otorgamiento de las concesiones de uso de agua, debe satisfacerse los requerimientos dando preferencia al uso que esté colocado en mejor lugar en la tabla de usos que el artículo lo indica. Esta preferencia debe entenderse siempre que la concesión no se haya acordado en forma definitiva, disponiéndose que debe preferirse la presentada con prioridad horaria, sólo cuando se trata de aguas que son solicitadas con el mismo destino por empresas de igual importancia.

El derecho a usar de las aguas públicas, se obtiene, tanto "ministerio legis" (caso del Art. 662 que autoriza el uso del agua para menesteres domésticos sin otra restricción que el cumplimiento de las ordenanzas), como por concesión de la Autoridad (supuesto del artículo 652 y concordantes).

ii) - Procedimiento para el otorgamiento de concesiones.

El procedimiento para el otorgamiento de concesiones exige del interesado la presentación de una solicitud de concesión, junto a la cual debe agregar croquis del perímetro a regar, de las obras a realizar, la cantidad de volumen que solicita y el caudal total que el curso de agua acarrea. También debe describirse las propiedades que el curso atraviesa.

Esa solicitud iniciará un expediente administrativo (Art. 660 C.R.) en el que deberá citarse a los vecinos por edictos. Escuchadas las razones y oídos los dictámenes técnicos pertinentes, se resolverá por la autoridad o elevará a la Legislatura si fuere el supuesto.

Otorgada la concesión por existir caudal bastante y no estar en juego ninguna prioridad, el concesionario debe construir las obras en el plazo que la autoridad le señale, caducando la concesión si no las realiza en el plazo y modo que la autoridad le indicara.

Igual caducidad se producirá, si hechas las obras el concesionario no usa el agua por más de un año (Arts. 680; 688; 689; 690 y 691 del C.R.).

iii) - Uso doméstico del agua.

Los distintos usos de que es susceptible el agua pública, son regulados a lo largo del Código Rural con especial detenimiento. Tal como lo acabamos de señalar, el uso doméstico está permitido a todos los habitantes de la Provincia sin otra limitación que el respecto a las ordenanzas Municipales, las que pueden reglamentarlo pero no suprimirlo.

iv) - Uso municipal.

El uso municipal del agua, que corresponde a los servicios de agua corriente y cloacales, se reglamentan en el Capítulo II del Título III del Código y quedan legislados en los Arts. 664 y 676. Tales disposiciones tienen vigencia efectiva en cuanto no entran en conflicto con las de carácter nacional, en los casos de ciudades y pueblos que son servidos por Obras Sanitarias de la Nación, en razón de leyes o convenios especiales, suscriptos con el organismo nacional.

Para el abastecimiento de poblaciones, el Art. 664 dispone una limitación al uso por los particulares de las aguas, sean públicas o privadas, por cuanto el Estado está facultado para tomar cualquiera de ellas, abonando una indemnización por el perjuicio que provoca si son aguas privadas y simplemente expropiando los terrenos necesarios para el acueducto si se trata de aguas públicas. La limitación del derecho de uso del agua está dado por la dotación de 50 litros diarios por habitante, caudal del que deberá disponer la población, aún a costa de otros aprovechamientos que se proyecten. Si por el contrario la fuente de donde se toma agua es suficiente para el abasto local, la municipalidad no puede evitar que se haga uso del sobrante - con otro destino. (Art. 669 C.R.).

Se establece también que si la explotación de las obras de aguas corrientes, se conceden a particulares, las instalaciones pasarán al término de la concesión al dominio municipal estableciéndose como plazo los 75 años, reservándose la municipalidad respectiva el derecho de establecer las cláusulas de la concesión y las tari-

las normas que rigen las servidumbres de abrevadero y saca de aguas en los casos que comentamos. (Arts. 674; 675 y 676 C.R.).

v) - Uso agropecuario.

El uso de las aguas públicas con fines agropecuarios se legisla en el Capítulo III de este mismo libro III del C.R. tales disposiciones se complementan con las del Capítulo V de ese mismo Libro, en donde se regula la desecación de terrenos.

El Art. 679 del C.R. desarrolla el principio general según el cual los particulares pueden usar de los bienes del dominio público sin que ello implique la transferencia del dominio en cuestión o la perpetuidad o irrevocabilidad de la concesión la que puede producirse en los casos que la ley señala. El modo en que la Administración debe ejercer sus facultades discrecionales en lo que al caudal a conceder se refiere, está regulado por el Art. 681, que en tres hipótesis esenciales plantea los casos según se trate de grandes ríos, ríos menores o simples arroyos de escaso caudal.

En el supuesto de que el caudal disminuya por encima de lo previsto, el Art. 682 establece el Turno, como sistema para resolver la escasez del agua.

Alguna vez se dijo al hablar de este Capítulo del riego de la ley de Corrientes, que tenía una cierta preferencia por los ribereños en desmedro de los situados a distancia de los caudales. Tal afirmación queda contestada por la hipótesis del Art. 687 del mismo C.R. que prevé la igualdad de derechos entre propietarios no ribereños y los situados junto al cauce. Una solución distinta en el uso del agua pública contraría toda la estructura del código, el que quizá produzca equívoco, al designar el Capítulo que comentamos con la expresión "De la Irrigación a beneficio de los propietarios ribereños". Esa falla gramatical, hubo de producir la observación que ahora criticamos y dejamos en claro.

vi) - Consortio de Regantes.

La comunidad de regantes consistente en la reunión voluntaria de los regantes de un canal para realizar las obras necesarias, repartirse el caudal de agua y realizar las tareas de mantenimiento y policía, tiene acogida en la ley de Corrientes. La institución ha rendido excelentes frutos en Mendoza, a más de reconocer tradición secular en los países europeos en donde los jueces designados por tales comunidades han alcanzado un prestigio y autoridad notables pese a su condición de legos. Tres artículos atienden la regulación de la institución, que debe ser aprobada por el Estado al igual que sus estatutos y sus obras. (Arts. 685, 686 y 687 del C.R.)

El Código Rural autoriza al gobierno a conceder a empresas particulares la explotación del aprovechamiento de aguas para irrigación, en las zonas o sistemas hídricos que se determine. En tales casos, las tarifas que tales concesionarios impongan a los usuarios por el servicio que presten, estarán establecidas por el P.E.

Se complementan las disposiciones sobre uso agropecuario con las normas que sobre desecación de terrenos trata el capítulo V. Allí se plantean dos situaciones esenciales, según se trate de terrenos que se declaren insalubres por el Estado o de simples lagunas o terrenos pantanosos.

En el caso de terrenos declarados insalubres, los dueños una vez notificados de la declaración, tendrán un plazo para realizar las obras de desagüe. Si la mayoría de afectados se oponen (entendida la mayoría según la superficie saneable que se posea) o no la realizan, el Estado puede realizar los trabajos o encargarlos a una empresa concesionaria, quedando la propiedad del Estado o del concesionario, según el caso, el terreno saneado y abonándose a los anteriores propietarios el valor del terreno. Ese valor deberá determinarse fijando el resultado económico del terreno saneable en el último año antes de la desecación y estableciendo que esa suma conforme el interés de plaza sería el rendimiento razonable (bancario) de un determinado capital, que es el que debe pagarse como valor del terreno. El procedimiento debe aplicarse también a los terrenos insalubres de propiedad del Estado. (Arts. 704; 705; 706; 707 y 708 del C.R.). A este criterio de valuación se llama valuación según poder de ganancia. La Corte Suprema lo ha aceptado (Fallos CLXXIV; 363).

Los terrenos que el concesionario adquiere por efecto de su actividad o que los particulares por sus propios medios desecan, no serán revaluados por efectos de

las obras realizadas, sino que por contrario mantendrán el mismo valor anterior, a los efectos del pago de la contribución inmobiliaria. (Art. 709 C.R.).

Cuando se trata de terrenos simplemente pantanosos, la ley autoriza al particular a disponer gratuitamente de la piedra y tierra que le sea necesaria y se encuentre en los terrenos públicos, siempre que se solicite permiso a la autoridad. (Art.-703).

Si los terrenos en cuestión pertenecen a propietarios vecinos y la mayoría (entendida según la superficie) desee desecarlo, la Autoridad obligará a todos los afectados a hacerlo, permitiendo la cesión del terreno a quien resista el pago. Aunque la ley no lo dice, el adquirente deberá fatalmente coadyuvar al pago de los gastos que el anterior no quiso realizar. (Art. 704 de C.R.).

Las disposiciones generales que el Código prevee para otras formas de concesión, le son aplicables a los concesionarios de desecamiento.

vii) - Usos hidroeléctricos e industrial.

En el Capítulo VIII del Libro III del Código Rural, bajo el título "Aprovechamiento de las aguas para establecimientos industriales", se establecen disposiciones que superan el enunciado indicado y que alcanzan otras situaciones, tales como la que deviene de la utilización de las aguas para la generación de hidroelectricidad.

En este sentido el Art. 727 del Código, utiliza una fórmula amplia, según la cual el interesado en realizar o construir obras hidráulicas de aprovechamiento, deberá presentar una solicitud acompañada de los planos y memoria descriptiva de los trabajos, la que permitirá a la Administración juzgar la conveniencia de la obra, en los términos que señala el Art. 728 y otorgar el correspondiente Permiso. La realización de la obra en ningún caso podrá provocar el trasvase del caudal.

El establecimiento de aparatos e instalaciones impone la necesidad de solucionar los conflictos de derecho que por ocupación de los terrenos se provoca. El Código, anticipándose a esas dificultades tiene dispuesto que el interesado en realizar la obra deberá ser propietario de la ribera en que tales obras asienten. Al imponer esta exigencia, el Código excluye la posibilidad de emplear la llamada servidumbre de asiento de presa, por cuanto mientras la obra se apoya en el cauce, se ocupa el dominio público que la Autoridad ha permitido usar al aceptar la obra, y fuera de ese cauce - que debe delimitarse en su extensión por la misma Autoridad -, la propiedad debe corresponder al permisionario de la obra, lo que significa que ningún particular, dentro del sistema adoptado, soportará obras de interés público en su terreno, salvo el propio permisionario interesado (Art. 729 C.R.).

La estructura expuesta es razonable y puede complementarse con una declaración de utilidad pública, en todas las riberas que sean destinadas al aprovechamiento hidroeléctrico o industrial.

Pero el aprovechamiento de aguas por las industrias, está en lo esencial previsto en el Art. 731 del C.R. que impone para su concesión y establecimiento de servidumbres idéntico trámite al regulado para el riego. La autoridad deberá pues basarse en esas mismas disposiciones tanto en lo que a la decisión se refiere como a las etapas administrativas que deben cumplirse.

Si cualquier motivo de utilidad pública obliga a suprimir las instalaciones autorizadas y que se encuentran en efectivo funcionamiento, se impone el procedimiento de la expropiación, la que no se llevará a cabo, si durante dos años no fuera usado el agua con el destino industrial indicado.

Una última disposición establece que para la construcción de muelles en cursos navegables o flotables se requiere concesión de la Autoridad. Esta concesión debe considerarse necesaria por razones de policía administrativa, pero no debe olvidarse que es atribución del Gobierno Federal la autorización de muelles en los ríos navegables (Art. 730 C.R.).

viii) - Uso minero.

Respecto del aprovechamiento de las aguas para el uso minero, el Código guarda silencio, por cuanto esa actividad no fue estimada esencial en Corrientes. Las actuales evaluaciones, hacen suponer sin embargo que será necesario establecer normas

de regulación de la misma, había cuenta de la situación de Corrientes dentro de la presunta cuenca petrolífera denominada "Chaco Paranaense", de cuya existencia y determinación se dieron amplias referencias en el Sexto Congreso Mundial de Petróleo, reunido en Alemania en 1963.

Por lo demás, al encontrarse Corrientes en el límite suroeste del Escudo Brasileño, no es posible descartar la existencia de minerales de importancia estratégica, respecto de los cuales resulta anticipado abrir juicio, por la circunstancia de desconocerse su ley o valor efectivo.

La explotación petrolífera por sí sola, es una consumidora en gran escala de agua, en razón de que la perforación y los procesos de refinación imponen un alto uso consuntivo.

Estas razones imponen la adopción de normas regulatorias especiales. Con respecto al aprovechamiento de los cauces de los ríos Paraná y Uruguay y de las lagunas o corrientes fluviales interiores en que corresponda la jurisdicción provincial por tratarse de aguas públicas, una ley especial, la ley 2065 (publicada en el B.O. del 29/VIII/60) ha dispuesto que corresponde su concesión al Director de Fomento Industrial y Económico de la Provincia, que deberá actuar en el caso, en representación del P.E. local. En el otorgamiento de tales concesiones, deberá intervenir la autoridad de aguas quien deberá coordinar con el Director en cuestión, la oportunidad de tal utilización del cauce.

ix) - Uso Piscícola.

En lo que respecta al uso piscícola de las aguas, el Código lo trata en el Capítulo II del Título II del Libro I, que se refiere a "De la pesca".

Al tratar la pesca, se distingue la que se realiza en ríos y arroyos de "uso" público de aquella en río, arroyo o laguna de propiedad privada, o bien de propiedad pública que sirven de deslinde a propiedades privadas, sin ser navegables.

En el primer caso, se autoriza la pesca libremente con la única sujeción a los reglamentos administrativos, que podrán determinar época y horas, instrumentos aparos y lugares prohibidos. (Arts. 164 y 173) y mantener las aguas en condiciones de navegabilidad. Esta libertad de pesca alcanza a los canales, acequias y acueductos que transporten aguas públicas, salvo que esté reservada la pesca a los concesionarios. (Art. 166 C.R.).

Es indispensable tener consentimiento de los propietarios de las riberas (Art. 167 C.R.), para establecer aparejos, encañizados o pesqueras. Es necesario además permiso de la autoridad en los ríos navegables no siendo necesario ese permiso en los utilizados para flotación, si no se causa perturbación a la misma. (Art. 168 C.R.). Los daños que en tales equipos se produzcan por efecto de la navegación o flotación no dan derecho a indemnización, salvo que hubiera mediado dolo o culpa de los navegantes.

La pesca en arroyos, estanques, lagunas o charcos de propiedad privada está prohibida bajo sanción de secuestro de la pesca obtenida y pago de multas. Sin embargo, en las propiedades sin cercar, que no tengan aviso claro de la prohibición, podrán los particulares pescar libremente.

La última hipótesis que parece contemplar el Código, se vincula a la pesca en cursos de agua, ríos y arroyos que no sean navegables y susceptibles de uso público, caudales que quedan reservados a los propietarios ribereños, que pueden pescar siempre que no avancen más allá de la mitad de las aguas. (Art. 171 C.R.).

En los viveros y criaderos de peces la pesca está prohibida, salvo el derecho de los concesionarios. La solicitud para el aprovechamiento del agua con destino al establecimiento de viveros debe presentarse a la Autoridad, la que someterá a las condiciones generales de concesión que regula el Art. 660 del C.R., a más de las exigencias particulares que impone el Art. 175 C.R.

La actividad discrecional que ella cumple está normada en sus lineamientos generales, por las exigencias del respeto a los aprovechamientos anteriores o perjuicios a la navegación o mantenimiento del caudal. (Art. 174 C.R.).

Tanto la protección de la riqueza piscícola como razones de seguridad general, han orientado la prohibición general de pescar con dinamita u explosivos o por

medios mecánicos que impliquen el apresamiento de gran cantidad de peces con mínimo esfuerzo. Tal prohibición se extiende también a la pesca realizada con sustancias químicas que a más de producir gran mortandad en los cardúmenes provocan la descomposición de las aguas. Una multa castiga el incumplimiento de esta norma.

El desconocimiento de esta disposición, provocó la sanción del Art. 2 de la Ley 2110, en que se dispone una vez más la prohibición de pesca con explosivos y redes en los ríos, arroyos, lagunas de jurisdicción provincial. La ley que criticamos, tiene sin embargo acierto al imponer el uso de mallas de protección en la entrada de las bombas que utilizan aguas provenientes de cursos superficiales. Con esa exigencia - que pudo ser objeto de una disposición reglamentaria - se trata de impedir la captura involuntaria de la fauna piscícola que es generalmente arrastrada en el bombeo. (Bo. 23/XI/60).

El Art. 176 del C.R. con una terminología deficiente que puede provocar equívoco, establece la prescripción brevísima de tres días para la denuncia de las infracciones que en el régimen de pesca pueden producirse. Esa prescripción es sólo aplicable a las infracciones al régimen de pesca en sí propio y no a los incumplimientos del régimen general que hace a la construcción de obras y aprovechamientos.

Para los reclamos que el ejercicio de la pesca produzca se impone la competencia de la Justicia de Paz, salvo los hechos que se vinculen al aspecto policial.

x) - Uso recreativo.

El uso de extensiones individualizadas de playas y aguas adyacentes con fines recreativos o de interés turístico no ha sido normado aún en la Provincia, como tampoco se han dictado normas que protejan las riberas de excepcional belleza panorámica. Estas ausencias deben ser prontamente cubiertas para beneficio de los recursos naturales que deben conservarse.

El establecimiento por los particulares de barcas de paso o puente flotantes, sea con el propósito de prestar un servicio público o el propio particular de transporte, requiere la autorización del gobierno, cuando se trate de ríos navegables en que la provincia tenga jurisdicción y no afecte el tráfico interprovincial.

En los ríos y arroyos no navegables que cruzan terrenos de un mismo propietario, no se requiere el permiso, siempre que se atienda el servicio privado de tales inmuebles. Cuando ese mismo servicio sea público y tenga la conformidad de los ribereños, su establecimiento requiere permiso municipal el que le será acordado si reúne las condiciones y se cobran las tarifas que la comuna fije.

La autorización de transporte puede caducar por declaración de la Autoridad, que deberá concretarla si el servicio esterba la corriente o las condiciones de la concesión no se cumplen.

xi) - Uso excepcional del agua por el Estado.

La utilización del agua por parte del Estado en casos de fuerza mayor o en que constituya una calamidad pública, no está sujeta a actuación administrativa ninguna ni tampoco a indemnización previa dentro del ordenamiento legal de Corrientes. Este postulado está inserto en el Capítulo I destinado a las disposiciones generales sobre el régimen de aguas, e implica que el Estado puede suspender, por las causas antes dichas, el uso que del agua estén efectuando los particulares en razón de concesiones, permisos o autorizaciones legales de carácter doméstico, municipal, agropecuario, energético, piscícola, recreativo o de transporte.

Se reafirma con ésto el concepto que anticipara el seguro apartado del artículo 652 del C.R. que establece la irresponsabilidad del Estado por la disminución del caudal de aguas públicas que tenga causas fortuitas o naturales. Se agrega a esas causas la propia acción del Estado, en cuanto esté motivada su acción por la presencia de un siniestro público o una circunstancia insuperable.

La disposición del agua por motivos excepcionales por parte del Estado, alcanza tanto a las aguas públicas como a las privadas, pero no da lugar a indemnización ninguna cuando se trata de las públicas. Tratándose de las privadas, si el uso que el Estado hizo de ellas en la emergencia produce algún perjuicio efectivo, el mismo debe ser indemnizado, conforme los principios aplicables respecto de los daños y perjuicios civiles.

xii) - Exploración de aguas.

4/23

La exploración de busca de agua en los terrenos pertenecientes al dominio público del Estado está reglamentada cuidadosamente en la ley de Corrientes. Para poder llevar a cabo tales trabajos, es necesario presentar una solicitud requiriendo permiso de la autoridad. En la solicitud en cuestión deberá determinarse el lugar en que van a efectuarse las investigaciones y el terreno necesario. La autoridad observará la conveniencia del requerimiento, determinando en primer lugar si tales exploraciones pueden distraer aguas públicas o producir merma en canales destinados al abastecimiento de poblaciones o áreas de irrigación. Hallando conveniente el pedido, procederá a acordar el permiso estableciendo las medidas de superficie dentro de las cuales el explorador podrá realizar sus trabajos con exclusividad (Art. 718 C.R.), debiendo la exploración realizarse en el término de seis meses.

Las exploraciones en cuestión, no pueden en principio solicitarse en 40 metros de edificios ajenos, ferrocarril o caminos y en 100 metros de otro alumbramiento, fuente o canal. Sin embargo, la autoridad o los propietarios pueden autorizar a que el concesionario realice su operación sin respetar los radios de protección indicados.

Terminadas las obras de alumbramiento dentro del plazo antedicho, la autoridad otorgará el título de propiedad de las aguas subterráneas alumbradas. Al disponer de ese modo de este bien público, el Código realiza una verdadera desafectación del carácter que tales aguas tenían, en razón de estar situadas en terrenos públicos.

El derecho que la ley acuerda es sin embargo revocable. El Art. 720 establece como causales de caducidad, el dejar cegar la fuente, no realizar los trabajos de alumbramiento o simplemente no concurrir al término de ellos a solicitar la concesión definitiva.

A más de reglar el aprovechamiento de las aguas subterráneas del dominio público, el Código ratifica el principio de libertad de alumbramiento que tienen los propietarios de fundos con respecto al agua que yace en el subsuelo. Las únicas limitaciones que existen a este respecto, están basadas en razones de policía que han impuesto un radio de protección de 15 metros con respecto a otras obras de aprovechamiento hídrico. (Art. 712 C.R.).

En el caso de que la obra a realizar sea un pozo artesiano, el Art. 721 indica que corresponde establecer una superficie más amplia para el permiso que la habitual, en razón de la gran profundidad a que debe llegarse en tales casos, para lograr captar el agua contenida entre las capas subterráneas impermeables.

En tales trabajos la concesión no debe imponer término alguno para su realización, pero el concesionario no podrá suspender sus tareas por más de cuatro meses, bajo pena de caducidad. (Art. 721 C.R.).

xiii) - Control del efecto nocivo.

La contaminación que puede producir en las aguas las sustancias que en ellas liberen las industrias está prevista en el Art. 732 del C.R. que faculta a la autoridad administrativa a hacer cesar la actividad de que se trata hasta tanto no se corrija la anomalía. Esta medida es similar a la que otras leyes provinciales tienen dispuestas para estos casos y resulta razonable en razón del perjuicio que supone el inficionar las aguas. La reglamentación administrativa podrá imponer el detalle de las exigencias técnicas que deberán llenarse para permitir la habilitación de industrias y su efectivo funcionamiento en condiciones apropiadas.

Otro efecto altamente importante de las aguas, de carácter negativo, es el que producen las inundaciones. La provincia ha dictado leyes, de las que es un ejemplo la N° 555 sancionada el 18 de noviembre de 1927 (véase Leyes de la provincia de Corrientes, Tomo II p.142. Corrientes. 1950), mediante las cuales se ha atendido los efectos sociales que las inundaciones ocasionadas por crecimientos extraordinarios de los ríos, han provocado a los pobladores. La organización de la asistencia material de los perjudicados por tales calamidades merece un régimen permanente que permita una adecuada atención tanto en la prevención del siniestro como en las consecuencias producidas.

Entre las medidas de previsión puede establecerse la conveniencia de realizar ciertas obras tendientes a evitar las inundaciones o regularizar la corriente de

los ríos. Tales obras, por efecto de una sana previsión de la ley Correntina (Art. 710 C.R.) deben ser autorizadas por la ley especial, en la que habrá de determinarse la provisión de los gastos a realizar y la expropiación de terrenos que sea necesaria a tales fines.

El Estado sin embargo puede disminuir los costos imponiendo la participación de los propietarios ribereños, en las obras necesarias. Para llevar a cabo esta alternativa, la ley exige que la mayoría de propietarios (considerados sus votos conforme a la extensión de terrenos de cada uno) manifiesten su conformidad con la realización de la misma y consecuente pago en partes proporcionales de las erogaciones que el Estado no esté en condiciones de financiar.

Contra la resolución de la mayoría, se permite la interposición de un recurso de queja de carácter administrativo por ante la autoridad de aguas local.

Cuando las obras de protección no son importantes y los propietarios ribereños manifiestan interés en realizarlas, el proyecto que pretenden deberá ser sometido a la consideración de la autoridad de aguas, la que otorgará la correspondiente autorización, sometiendo su decisión a los planes generales de la región y a la conveniencia general del sistema propuesto.

xiv) - Servidumbres.

Fuera de las servidumbres de carácter administrativo que el Código Rural legisla en los Arts. 674, 675 y 676 en relación con el servicio de obras sanitarias de carácter Municipal, la ley regula el régimen de servidumbres en el Capítulo IV del Libro III, que comprende los artículos 692 a 702. Dispone sobre ella, como servidumbre de derecho civil en el Art. 692, reglando la institución bajo el supuesto que existe acuerdo por parte de los interesados en la constitución de la limitación al dominio. Pero para el caso de que exista negativa a soportar la servidumbre, el Art. 693 dispone que por concesión administrativa puede constituirse el derecho en cuestión, siempre que el oponente no logre demostrar a la autoridad que existe un camino mejor o que es posible utilizar un caudal más cercano al predio dominante, o simplemente que el solicitante no es propietario de tal predio.

Desechadas las oposiciones, toda servidumbre que se prevé de una duración menor de diez años, deberá abonar al propietario del fundo sirviente, el 50% del valor del bien, con más de un 10%. Si fuere por más tiempo o al tiempo próximo a su vencimiento hubiere interés en mantenerla, deberá integrarse el saldo del valor, con más los intereses de ese saldo, desde el día de la construcción de la limitación al dominio.

Otras normas regulan las condiciones generales que debe reunir el acueducto y los lugares que debe ocuparse, conforme lo determine los peritos. (Art. 701 y 702).

La servidumbre necesaria a los establecimientos industriales está permitida por el Art. 731, que dispone se utilicen los mismos procedimientos que los señalados en el capítulo de las servidumbres, cuando de tales establecimientos se trata.

4.1.2. BOSQUEJO DE DISPOSICIONES PRINCIPALES DE UN FUTURO PROYECTO DE CODIGO DE AGUAS.

4.1.2.1. METODOLOGIA

En las páginas siguientes se bosquejan las principales disposiciones que se sugiere conveniente adoptar en un futuro Código de Aguas de la Provincia. Como puede apreciarse, las normas que se proyectan no suponen la derogación de las disposiciones del Código Rural, sino que por el contrario, se persigue obtener una adecuada relación con las normas rurales, en cuanto éstas han recogido la experiencia de la ley mendocina de aguas, de tan feliz vigencia en el país.

Las disposiciones creadas para la nueva ley de aguas, persiguen definir los derechos de la Provincia en sus relaciones con otras entidades interesadas o afectadas por el aprovechamiento hidráulico. En este sentido, deseamos destacar la novedad de las mismas, en cuanto no son usuales en el derecho argentino de aguas.

Se recoge además la experiencia de otras provincias en cuanto han logrado regular sus ríos mediante acuerdos o tratados de real espíritu federalista, salvando las ausencias que el C. Rural tiene en ese sentido.

Nuevos textos regulan usos del agua antes no legislados, y, en todos los casos, se ha destacado la importancia de la actividad privada en esta materia, depurando el concepto de concesionario y facilitando su participación intensa en todos los sectores, con adecuado control de la administración.

Finalmente, se ha definido en forma cuidadosa las atribuciones de la Autoridad de Aguas, la que se concibe de carácter administrativo, si bien se recomienda tenga independencia total del poder político, para el mejor y más efectivo cumplimiento de sus funciones.

Las nuevas normas que se proponen tienden a reglar en primer término la actividad de planificación en materia hídrica, por parte del Estado. Esta función será cumplida por el ENTE DE FOMENTO AGROPECUARIO, que deberá coordinar los programas y proyectos de aprovechamiento de caudales que realice el gobierno.

La autoridad regulatoria, de control y administración, se prevé del resorte del Ministerio de Obras Públicas, el que ejercerá sus atribuciones por intermedio de la Autoridad de Aguas, ante la cual corresponderá tramitar las concesiones, permisos y demás derechos sobre las aguas. A esta autoridad toca igualmente proponer las prioridades en el uso del agua, la confección de registros y padrones, la aprobación de proyectos y planos de obras, la constitución administrativa de servidumbres y la policía de aguas.

La actividad "empresaria" del Estado que se efectúa cuando se construyen obras o prestan servicios, corresponderá también al Ministerio de Obras Públicas, que operará y construirá obras y servicios de abastecimiento municipal y doméstico por intermedio de la Dirección Provincial de la Energía. También le competirá a esa Dirección el control de la contaminación de aguas, el control de inundaciones y los trabajos de aprovechamiento de aguas subterráneas que el Estado investigue o realice.

Las disposiciones en cuestión son las siguientes :

4.1.2.2. ANTEPROYECTO DE CODIGO DE AGUAS

CAPITULO I - DISPOSICIONES GENERALES.

Art. 1 - Se reglan por la presente ley y por las disposiciones pertinentes del Código Rural, las relaciones jurídico-administrativas que tengan por objeto las aguas, sus cauces y las obras de aprovechamiento hídrico, en cuanto corresponde su regulación al gobierno provincial.

Art. 2 - Se declaran del dominio público de la Provincia de Corrientes:

1. Las aguas que sirven de límites con otro país u otra Provincia, en el volumen, proporción y condición que determinen los tratados internacionales o interprovinciales o las leyes de la Nación.
2. Los ríos, arroyos y toda otra agua que corra por cauces naturales.
3. Los lagos y las lagunas que la Administración determine susceptibles de ser nave-

4. Las aguas subterráneas y las de lluvia que yacen o caen en lugares de dominio público.
5. Las aguas meteóricas.
6. En el supuesto de los incisos 1, 2 y 3, los cauces y las playas, consideradas estas últimas hasta el límite que señalan las aguas en sus crecidas ordinarias más altas.
7. La fuerza cinética que las aguas indicadas en los incisos anteriores produzcan.
8. Las islas formadas o que se formen en los ríos, arroyos o lagunas públicas, cuando no estén afectadas al uso particular.
9. Las obras hidráulicas de aprovechamiento establecida en los cauces o playas a que se refiere el inc.6, sea quien fuere su constructor o responsable de pago, y sin perjuicio de su operación por particulares.
10. Los acueductos y otras obras hidráulicas construídas fuera de los cauces y playas públicas cuando sirven a más de un inmueble o al uso colectivo.

Art. 3 - Se reconocen en el dominio privado de los particulares y del Estado en su caso, sin perjuicio de las disposiciones del Código Civil:

1. Las aguas y los cauces de los lagos y lagunas que no sean señalados en el inciso 3 del artículo anterior.
2. Las aguas y los cauces de los esteros y bañados o de todo otro depósito natural - sin movimiento apreciable o durmientes.
3. Las aguas que nacen y mueren en un mismo fundo.
4. Las aguas de lluvias caídas en lugares privados.
5. Las aguas que broten en terrenos privados y el caudal que dichas aguas forman, salvo lo dispuesto en el último párrafo del Art. 2637 del C.Civil.
6. Las aguas subterráneas, freáticas o subálveas; en las condiciones que indica el Capítulo VI del Libro III del Código Rural.

Art. 4 - Se considerará nulo y sin efecto alguno el acto de los poderes nacionales que cree, modifique o extinga derechos de la Provincia sobre las aguas de su dominio público, sin la previa intervención y conformidad de los poderes provinciales, salvo en lo que se refiere a los actos en que la Nación detenta jurisdicción efectiva.

Art. 5 - En ausencia de intervención previa, queda el P.E. facultado para producir la denuncia de los compromisos o adhesiones que hubiere concertado con el gobierno federal, sea en materia de aguas o en otras, si por la importancia del desconocimiento de derechos, lo estima conveniente.

Podrá igualmente disponer lo necesario para hacer efectivo el respeto de los derechos o el restablecimiento de las situaciones preexistentes al acto cuestionado.

Art. 6 - El P.E. queda facultado para suscribir tratados de aprovechamientos de aguas, con la Nación, los estados extranjeros, otras provincias, gobiernos municipales, organismos internacionales, institutos o empresas de estado, siempre que esté reconocida la capacidad técnica y solvencia económica de las otras partes contratantes.

Art. 7 - No podrán ser objeto de tales acuerdos, las estipulaciones mediante las cuales sufran detrimento los derechos provinciales, ni las materias que se refieran a las normas de navegación o policía que corresponden al gobierno federal.

En todos los casos, los tratados deberán ser sometidos a la aprobación de la Legislatura.

Art. 8 - En las condiciones que esta Ley y el Código Rural indican y con los derechos y obligaciones que la Autoridad de Aguas imponga, se autorizará la realización por concesionarios de las siguientes obras de carácter hidráulico :

- a) Abastecimiento de agua potable y servicios cloacales de poblaciones.
- b) Irrigación de áreas rurales.
- c) Desecamiento de terrenos y pantanos.
- d) Saneamiento de terrenos y pantanos.
- e) Alumbramiento de aguas en terrenos públicos.

- f) Aprovechamiento de energía hidráulica.
- g) Establecimiento de viveros o criaderos de peces.
- h) Aprovechamiento escénico o panorámico.
- i) Establecimiento de barcas de paso o puentes flotantes.
- j) Construcción de muelles.

Art. 9 - En relación a las necesidades que la realización de las obras indicadas en el artículo anterior puedan provocar, o para satisfacer un interés científico, queda la Autoridad de Aguas facultada para reglamentar, con las modalidades que estime conveniente, el permiso para realizar estudios de agua, a que se refiere el Art. 654 del C. Rural.

Art. 10 - Es de competencia del estado provincial la realización de las obras de defensa contra las inundaciones, salvo lo dispuesto con referencia a los propietarios interesados en el Capítulo VII del Libro III del Código Rural. Sin embargo, presentándose un interesado en realizarlas o conviniéndose tal realización con otra entidad de gobierno, se requerirá la sanción de una ley especial que acepte las condiciones de la concesión.

Art. 11 - Las obras de aprovechamiento de aguas públicas que los particulares realicen para su propio uso, quedan sujetas a las disposiciones de esta ley, del Código Rural y de las reglamentaciones que la Autoridad de Aguas establezca.

Quedan también sujetas a los reglamentos de policía hídrica que expida la citada Autoridad, los usos de aguas del dominio privado, y las obras de captación, derivación y aprovechamiento, en cuanto tales reglamentos deben velar por la conservación de la riqueza colectiva, de los demás recursos naturales y de la preservación del orden público.

Art. 12 - El Estado Provincial queda facultado para realizar todos los aprovechamientos y obras que sean necesarios, cuando no exista concesionario y sea evidente la necesidad pública de fomento. Sin embargo, tanto el estado provincial como el nacional o sus oficinas técnicas o las oficinas y agencias internacionales, o los entes comunales u oficinas gubernativas descentralizada, o los particulares concesionarios, deberán solicitar la correspondiente concesión a la Autoridad de Aguas, la que sólo podrá conferirla, cuando el proyecto o aprovechamiento que se intente no perturbe los derechos existentes, o perturbándolos triplique el nuevo aprovechamiento los resultados económicos de la primitiva concesión. Los usuarios perjudicados tendrán preferencia en la adjudicación de los nuevos usos si tal es el caso.

Art. 13 - El otorgamiento de toda concesión de agua pública supondrá la previa determinación de la dominialidad estatal, tanto en las aguas como en el cauce. Esa determinación deberá efectuarse en lo que al cauce se refiera, procediendo la administración a fijar el límite del dominio público, señalando la línea de la ribera, que en todos los casos, deberá coincidir con la línea natural que alcancen las aguas en sus más altas crecidas ordinarias. Respecto de las aguas, la administración deberá determinar por el procedimiento técnico que la reglamentación establezca, la posibilidad de navegabilidad de lagos y lagunas, aseveración técnica que será suficiente aunque en la práctica no se produzca el hecho físico de la navegación. Cuando se trate de aguas que corren, bastará apreciar su movimiento, en el modo que la reglamentación señale.

Art. 14 - En los ríos que sirven de límites, se estará a los que la Nación haya fijado; cuando se trate de los internacionales y cuando se trate de interprovinciales se adoptará como cauce público el que a la provincia le corresponda, por convención interprovincial o ley de límites nacional si las hubiera, entendiéndose ese dominio hasta la mitad del canal navegable principal, a falta de norma expresa, pudiendo disponerse hasta allí del caudal de las aguas.

Art. 15 - Cuando la Nación haya determinado la línea de ribera, en los ríos en que la jurisdicción en razón de materia le compete, se estará a esa determinación.

Art. 16 - La adjudicación del agua implicará la adjudicación del sector de cauce que las obras aprobadas ocupen. Cuando el concesionario de obras públicas a que se refiere el Art. 8 de esta ley, requiera para el cumplimiento de su propósito ocupar tierras de terceros, podrá recurrir a la expropiación de la misma, en la extensión que determine la Autoridad de Aguas y con las obligaciones del estado provincial en lo que se refiere a la indemnización y procedimientos.

Art. 17 - A los efectos procedentes decláranse de utilidad pública y sujetas a expropiación, previa la pertinente indemnización, los terrenos, construcciones y obras cuya ocupación y utilización sea necesaria para la construcción, conservación y explotación de las concesiones u obras hidráulicas aprobadas por la Autoridad de Aguas, sea cual fuere su realizador.

Art. 18 - Cuando por efecto de las obras, una parte de cauce quede desecado, la Autoridad de Aguas podrá imponer al propietario expropiado que acepte el terreno en cuestión, en sustitución del que le ha sido expropiado.

Art. 19 - En todos los casos esta compensación solo se efectuará en la misma proporción que el terreno original afectado, disminuyendo el monto de indemnización y siempre que la porción que se entrega esté convenientemente desecada y no dé lugar a una explotación antieconómica, por su colocación resultante.

Art. 20 - Las aguas públicas podrán ser usadas por todos los habitantes de la Provincia sin necesidad de cumplimentar requisito alguno, cuando se requiera para bebida e higiene humana, y para abreviar ganado en tránsito, siempre que no se empleen medios mecánicos para su extracción y se cumplan las ordenanzas municipales a que se refiere el Art. 662 del Código Rural. Con igual amplitud podrá usarse del agua de lluvias que caigan en terrenos del dominio público. En todos los casos, la Autoridad de Aguas podrá imponer las medidas de policía de uso que estime conveniente.

Art. 21 - En igual situación que el artículo anterior se encuentran las aguas privadas que yacen en fundos no cercados o sin clara prohibición de uso establecida por el propietario.

Art. 22 - Las aguas públicas necesarias para las explotaciones de yacimientos minerales deberán solicitarse a la Autoridad de Aguas, que las concederá en el volumen y condiciones que estime conveniente y siempre con preferencia para la explotación de más importancia económica.

Art. 23 - A los efectos del orden de preferencia a que se refiere el Art. 655 del Código Rural, derógase el inciso segundo del mismo, en sustitución del cual se establece: A la explotación mineral y empresas de transporte.

Art. 24 - La concesión de aprovechamiento de cuaces y playas públicas con carácter minero queda sujeta a las disposiciones de la ley provincial 2065 y a las disposiciones de esta ley.

Art. 25 - La concesión de aprovechamiento de aguas, cauces y playas públicas con fines recreativos o turísticos, corresponde a la Autoridad de Aguas, con las condiciones que ella imponga. En tales lugares podrá imponer reglamentos especiales destinados a la protección del panorama existente. El gobierno provincial podrá suscribir convenios con las Municipalidades en procura de tales objetivos.

Art. 26 - La infición de las aguas, sean públicas o privadas podrá efectuarse en los modos y grados que la Autoridad de Aguas determine, mediante los respectivos reglamentos, que en todos los casos estarán orientados a mantener el nivel sanitario natural y a favorecer los nuevos aprovechamientos de aguas ya utilizadas en usos no consuntivos.

Art. 27 - La Autoridad de Aguas podrá suspender todo aprovechamiento que contraríe las disposiciones vigentes, tanto por la falta de elementos y maquinarias de purificación, como por su rendimiento inadecuado; sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 732 del Código Rural.

CAPITULO II - DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA.

Art. 28 - Compete a la Autoridad Provincial de Aguas, salvo en el ejido de las ciudades, cuando el municipio tenga atribuciones acordadas por la ley orgánica respectiva:

- a) Acordar y caducar las concesiones, permisos y autorizaciones de aguas públicas a que se refieren la presente ley y el Código Rural, valorando la prioridad en el uso y la conveniencia del aprovechamiento.
- b) Reglamentar las condiciones, derechos y obligaciones de los concesionarios y usuarios de los estudios, aprovechamientos u obras que se realicen en el territorio provincial, como también las condiciones, derechos y obligaciones del Estado cuando interviene o realiza aprovechamientos y obras, controlando su cumplimiento, y autorizando la explotación de las mismas.

- o) Determinar el dominio público de la Provincia, y la superficie que puede ser ocupada con aprovechamientos u obras.
- d) Declarar las áreas pantanosas insalubres y determinar las obligaciones que por efecto de esa declaración resulten.
- e) Acordar las servidumbres administrativas que la ley autoriza, determinando su extensión y normas de uso, e indemnización.
- f) Aprobar la constitución de consorcios de usuarios, los reglamentos de carácter general y los propios de uso interno en el consorcio.
- g) Imponer la construcción de obras necesarias para evitar la alteración de la corriente o la inundación de los terrenos.
- h) Determinar las indemnizaciones que correspondan por el uso excepcional del agua privada a que se refiere el Art. 656 del C.Rural, o las que corresponden al abastecimiento de poblaciones a que se refiere el Art. 664, del citado Código.
- i) Asesorar al P.E. y a los Municipios cuando corresponda, en las materias que se vinculan a la aplicación o interpretación de esta ley o el Código Rural.
- j) Evacuar los informes que se le soliciten, de las autoridades y por los particulares, cuando tengan por objeto, proyectos o estudios autorizados, y en cualquier caso, cuando se trate de requerimiento judicial.
- k) Realizar el aforo de los caudales hídricos en forma progresiva, de acuerdo a la importancia de los mismos y a los efectos de facilitar el más continuo y equitativo uso de las aguas entre los interesados.
- l) Ordenar la inscripción marginal en el Registro de la Propiedad de los derechos al agua que se hayan reconocido o respecto de los inmuebles en el caso.
- m) Organizar el Catastro Provincial de Aguas, a cuyo objeto podrá exigirse de los concesionarios toda la información que sea necesaria para mantenerlo actualizado. Para el correcto cumplimiento de esta atribución, el Registro de la Propiedad deberá remitir a la Autoridad de Aguas, a fin de la actualización correspondiente, certificados de dominio solicitados para transferir la propiedad, en que por las anotaciones del mismo registro u otro indicio cierto, se encuentren afectados derechos a las aguas. La ausencia de éste trámite hará incurrir en falta grave al escribano interviniente, que será sancionado conforme los términos de la ley que reglamenta su profesión.
- n) Realizar la policía de aguas en materia privada, exigiendo el cumplimiento de los requisitos necesarios para la correcta evaluación de la riqueza hídrica, el adecuado estado sanitario y la seguridad de personas y bienes.
- ñ) Participar junto a las entidades administrativas en la realización de los estudios necesarios para determinar la conveniencia de un uso o aprovechamiento nuevo de aguas y cauces, disponiendo la caducidad del uso anterior de aguas y cauce, cuando el mismo implica 1/3 del rendimiento que para el nuevo uso se estima.
- o) Establecer el programa de uso de aguas y cauces más convenientes desde el punto de vista de la comunidad, y difundirlo con el objeto de estimular las solicitudes de utilización de conformidad con el plan aceptado.
- p) Aprobar los planos y obras de los aprovechamientos sean las aguas públicas o privadas.
- q) Ordenar la destrucción de los aprovechamientos y obras que amenacen la seguridad pública, no se ajusten a los proyectos aprobados o hayan sido realizados en forma clandestina.
- r) Determinar la extensión de superficie que puede expropiar el concesionario de obra pública, a que se refiere el artículo 8 y aprobar las compensaciones de terrenos que pueden realizarse para obtener el reembolso de la proporción de indemnización a que se refieren los Arts. 18 u 19.
- s) Intervenir en la concesión del aprovechamiento a que se refiere la ley provincial 2065, aprovechamiento que no se acordará cuando exista dictamen negativo de la Autoridad de Aguas.
- t) Declarar zona inundada la porción de territorio que queda bajo la acción de las a

u) Determinar la tolerancia de contaminación de aguas permitida a los concesionarios y establecer los procedimientos que deben utilizarse para disminuir ese efecto o evitarlo, pudiendo caducar la concesión si no se cumplen los recaudos en plazos razonables que establecerá la reglamentación.

Art. 29 - La Autoridad Provincial de Aguas, será ejercida por una Oficina Autárquica que mantendrá su contacto con el P.E. por el Ministerio de Obras Públicas y a través de la Dirección Provincial de la Energía.

Art. 30 - La resolución de la Autoridad será apelable, dentro de los cinco días hábiles de notificada, para ante el Ministro de Obras Públicas. La resolución que este adopte se considerará definitiva y podrá recurrirse ante el Superior Tribunal en la forma que establece el Art. 740 del Código Rural.

Art. 31 - La Autoridad de Aguas tendrá la facultad de hacer cumplir su decisión, aún cuando fuere apelada, si considerara que puede ocasionar grave daño la demora de su ejecución.

Art. 32 - En el caso del artículo anterior la resolución deberá ser especialmente fundada, sin perjuicio de lo cual, el Ministro podrá disponer que se suspenda la ejecución mientras se tramita el recurso.

Art. 33 - La Autoridad de Aguas podrá delegar sus atribuciones en funcionarios de su dependencia o funcionarios judiciales cuando deban cumplirse actos fuera de la sede de su dependencia. En tales casos, la resolución que establezca la delegación fijará los límites funcionales y de territorio que se le acuerda al funcionario delegado.

Art. 34 - La resolución que adopten los funcionarios autorizados, en la forma que establece el artículo anterior, será apelable ante el ministro, en la forma que establece el artículo 30 de esta ley y el artículo 740 del Código Rural.

Art. 35 - Toda agua privada y todo derecho al uso de aguas públicas deben ser inscriptos en el Registro Provincial de la Propiedad Inmueble en cuyo servicio están afectadas.

Art. 36 - Ningún derecho a aguas públicas o privadas será oponible a terceros sino se encuentra registrado. La reglamentación de la Autoridad de Aguas, determinará desde cuando esta norma tendrá vigencia.

Art. 37 - A partir de la fecha que la reglamentación establezca, ningún acto administrativo que otorgue derecho a usar aguas públicas, será exigible ni válido sin la anotación a que se refieren los dos artículos anteriores.

Art. 38 - Sin perjuicio de la obligación que establece el Art. 28 Inc. m) de la presente ley, será obligación de los propietarios de inmuebles comunicar quinquenalmente a la Autoridad de Aguas, mediante formulario que la reglamentación determinará, los siguientes datos :

- a) Título Jurídico que autoriza el uso del agua;
- b) Descripción gráfica de las obras hidráulicas de captación y aducción. Existiendo - plano aprobado, sin modificar, bastará remitir el número del mismo;
- c) Caudales y volúmenes usados por estación climática;
- d) Cota máxima y mínima de la pendiente, en el caso de uso energético;
- e) Volumen de la producción agrícola, ganadera o minera obtenida con las aguas utilizadas y área cultivada en su caso.

Art. 39 - La omisión de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo anterior puede ser sancionada con la suspensión del uso del agua, hasta tanto se cumplimente la obligación. El Reglamento fijará las fechas y modalidades que adoptarán las declaraciones.

CAPITULO III

DISPOSICIONES APLICABLES A OBRAS A REALIZAR EN AGUAS INTERPROVINCIALES O INTERNACIONALES.

Art. 40 - Cuando se trate de obras a realizarse en aguas limítrofes con otras provincias, el P.E., previa resolución favorable de la Autoridad de Aguas, procederá a proponer a la Provincia limítrofe, la conveniencia técnica y modalidades que presentará el cambio, siempre que, por las características del aprovechamiento proyectado, la Provincia limítrofe resulte en alguna manera interesada en el resultado de los trabajos.

Art. 41 - Cuando el beneficio que se espera del nuevo uso resultante de las obras proyectadas sea excepcional a criterio del P.E. se podrá mediante ley especial, indemnizar por los usos que cesen de realizarse en la provincia vecina, siempre que por convención especial se reconozca en favor de la provincia de Corrientes un derecho mayor de uso con respecto al caudal o lecho hasta entonces reconocido como propio.

Art. 42 - En el caso del artículo anterior, el tratado suscrito deberá ser comunicado al Congreso de la Nación conforme los términos del Art. 107 de la Constitución Nacional, con indicación expresa de la conformidad que hubieren prestado los organismos nacionales al tratado, en cuanto se refiere al respeto de la jurisdicción marítima que le corresponde al Gobierno Federal.

Art. 43 - Cuando el nuevo aprovechamiento que se proyecte afecte aguas limítrofes internacionales, el P.E. recabará la colaboración del Gobierno Federal a fin de convenir, mediante la intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, la ocupación o uso de los caudales o lecho que no corresponda a la jurisdicción argentina.

Art. 44 - Tratándose de aguas limítrofes internacionales, la indemnización por el uso de caudales o lecho que pertenecieran al país extranjero, sólo será procedente admitiéndolo los principios del Derecho Internacional Público y cuando se dieran las condiciones señaladas en el Art. 41 en cuanto derecho de uso de la provincia.

Art. 45 - Cuando las obras que se proyecten, sea en aguas interprovinciales o internacionales, deban ser realizadas por concesionario, el gobierno de la Provincia estará obligado, mediando concesión de obra acordada por la Autoridad de Aguas, a realizar las gestiones necesarias para obtener la situación jurídica a que se refieren los dos artículos anteriores. La falta de éxito en tales gestiones, eximirá al Gobierno de toda indemnización o reclamo alguno, que pretendiera el concesionario, sea cual fuere el estado de los trabajos.

Art. 46 - Mediando beneficio para las provincias o estados limítrofes, en la realización de obras proyectadas, el P.E. podrá concertar en forma directa o a través del Ministerio de la Nación respectivo, los acuerdos necesarios para la común financiación de la obra.

Art. 47 - Participando en la construcción de las obras, sean las provincias o sean estados extranjeros, el gobierno y operación del sistema corresponderá a una Autoridad regional, integrada por partes iguales y autónoma en cuanto a su gestión administrativa.

Art. 48 - Los propietarios de inmuebles afectados por obras hidráulicas, no tendrán otro derecho a indemnización que el que les corresponde por la expropiación de sus inmuebles o los daños que demuestren efectivamente haber sufrido. La realización de la obra, permitirá establecer una contribución especial de mejora, en cuanto pueda establecerse por el procedimiento técnico que la Autoridad de Aguas fije, el efectivo aumento de valor en los bienes.

CAPITULO IV

DISPOSICIONES APLICABLES A AGUAS O SUPERFICIES PRIVADAS AFECTADAS POR OBRAS AUTORIZADAS.

Art. 49 - Las disposiciones de los artículos 2645 y 2646 del Código Civil en cuanto prohíben superar la mitad del lecho con obras hidráulicas, debe considerarse únicamente aplicable a las aguas o lechos privados y a las relaciones entre ribereños que tales aguas imponen.

Art. 50 - Las obras hidráulicas que afecten inmuebles particulares, sean realizadas por el Estado o por concesionario debidamente autorizado, no podrán realizarse mediante el uso de las llamadas sorvidumbres de presa, cuando las obras tengan carácter permanente. En todos los casos, el procedimiento a emplear será el de la expropiación en los términos que la ley respectiva y esta ley autorizan.

Art. 51 - Cuando por efecto de la realización de una nueva red de canales u obras, exista la posibilidad de resultar terreno desecado, en proporciones semejantes a los nuevos que van a ocuparse, la Autoridad de Aguas podrá imponer la compensación de superficies, tomando para uso de las obras, una superficie semejante a la que se abandona.

Art. 52 - La Administración pública o el concesionario podrán eximirse de la obligación de indemnizar, en los casos que los interesados en la realización de las obras prezcan la donación del todo o parte de los terrenos necesarios. En tales casos, el acto de cesión deberá realizarse o ratificarse por ante la Autoridad de Aguas.

Art. 53 - Si por efecto de las obras o trabajos quedan superficies desecadas, en lechos que correspondían al dominio público del estado o al dominio privado del mismo, tales áreas corresponderán a este último dominio, excepto que el uso futuro del lugar le confiera el carácter de utilidad pública.

Art. 54 - En ningún caso será obligatorio el solicitar el uso de un aprovechamiento nuevo. Este principio no implica, sin embargo, exceptuar a los inmuebles beneficiados de la contribución especial que por el mayor valor adquirido por el bien le será impuesto.

Art. 55 - Cuando los trabajos sean efectuados por concesionario la contribución especial por la mejora, podrá percibirse en forma directa por el concesionario y en supro propio beneficio, si tales estipulaciones hubieran sido autorizadas por la Autoridad de Aguas.

Art. 56 - Los créditos a que se refiere el artículo anterior sólo pueden ser percibidos por el concesionario mientras sea titular del derecho correspondiente. Caducando su derecho, no podrá exigirse el pago de la contribución en cuestión, la que en cambio, podrá ser percibida por la Provincia o por el nuevo concesionario en el caso.

Art. 57 - La falta de pago de la contribución, permitirá la ejecución de la obligación por vía de apremio o por juicio ejecutivo, si correspondiere.

Art. 58 - El Estado o los concesionarios interesados en realizar obras de incremento pueden solicitar a la autoridad de aguas, la caducidad de los usos anteriormente acordados a terceros, siempre que el nuevo aprovechamiento que se proyecta, implique un incremento o mejora del uso $1/3$ respecto del anterior. La Autoridad de Aguas, estará facultada para establecer mediante resolución especial, la forma técnica a emplear para juzgar el incremento citado.

Art. 59 - Las modificaciones de los derechos sobre las aguas o lechos, deberán resolverse conforme las disposiciones respectivas del Código Civil, en cuanto estén motivadas por la acción de la naturaleza.

CAPITULO V

CONSORCIO DE USUARIOS

Art. 60 - Para la administración o ejecución de cualquiera de las obras que se describen en el Art. 8 de la presente ley, se admitirá como concesionario al consorcio de uuario que se organice, conforme las reglas de este título o las reglamentaciones particulares.

Art. 61 - Podrá admitirse también que el consorcio se limite a la administración de obras que realizare el Estado o que hechas por un concesionario, hubiere sido posteriormente abandonada o caduca.

Art. 62 - La constitución original de todo consorcio y todo cambio de autoridades deberá comunicarse a la Autoridad de Aguas, que estará facultada para revisar el acto constitutivo y exigir las adaptaciones que estime necesarias.

Art. 63 - El consorcio de usuarios será administrado por una Junta electa por los usuarios. Esta junta se compondrá de tres miembros, de los cuales uno presidirá y los otros cumplirán funciones respectivamente, de acuerdo con los estatutos que se aprueben.

Art. 64 - Al tiempo de elegirse los tres miembros de la Junta se votarán suplentes, para sustituir los titulares en caso de ausencia temporal o definitiva.

Art. 65 - La duración del período es de 2 años. Como condición de elección se impone que sean usuarios efectivos del sistema que operen. Mientras no se elijan reemplazantes, permanecen en sus cargos.

Art. 66 - La Junta debe elegirse por voto secreto, por los usuarios inscriptos en el padrón. La reglamentación establecerá la oportunidad y modalidades del acto electoral.

Art. 67 - La Autoridad de Aguas mantendrá actualizado para los fines indicados en el artículo anterior y para fines impositivos un padrón de usuarios.

la base de las informaciones o constancias de la oficina.

Art. 68 - En caso que comprometa el interés público, la autoridad de Aguas podrá intervenir los consorcios, disponiendo además las medidas urgentes que sean necesarias. La reglamentación establecerá los plazos en que se permitirá la constitución de una nueva junta de gobierno del consorcio, ante quien deberá rendirse cuentas de la gestión cumplida.

Art. 69 - Son facultades de las juntas :

- a) realizar el presupuesto de gastos, de acuerdo a la reglamentación que se dicte.
- b) establecer las contribuciones que deben efectuar los usuarios.
- c) contratar los empleados y obreros que sean necesarios a la operación del servicio.
- d) distribuir y prestar los servicios a los usuarios, conforme los derechos reconocidos.
- e) resolver los conflictos manores que la prestación del servicio puede ofrecer y en cuanto la resolución no excluya los derechos sobre el agua.

Art. 70 - La realización de obras distintas a las que fuera motivo del consorcio, sólo podrá ser emprendida cuando la Autoridad lo hubiere aceptado.

Art. 71 - Las resoluciones que las juntas adopten serán recurribles ante la Autoridad de Aguas, dentro de los 5 días de notificadas. Contra la resolución de la Autoridad podrá recurrirse conforme lo establecen los artículos 30 a 34.

Art. 72 - Sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones contenidas en el Capítulo VII del Libro III del Código Rural, podrá imponerse una contribución especial para las propiedades beneficiadas por el control de inundaciones que el Estado realice, aún cuando el efecto de las obras y trabajos sea mediano.

CAPITULO VI

FINANCIACION DE LAS OBRAS Y SERVICIOS.

Art. 73 - Cuando el Estado provincial realice una obra, la ley o el decreto que autoriza a la administración a concretar el proyecto, deberá establecer si la obra o el trabajo se realizará como fomento o si será financiada por los particulares, mediante un servicio especial de amortización que deberá ingresarse junto al pago del servicio.

Art. 74 - Será considerada de fomento la obra o trabajo que por la magnitud de sus erogaciones supere la capacidad económica de la zona de influencia que servirá.

Art. 75 - Sin perjuicio de considerar una obra como financiada por particulares, el P.E. estará facultado para facilitar préstamos o efectuar donaciones, con sumas existentes en el Fondo Hidráulico que crea el Art. 76 u otras leyes especiales.

Art. 76 - A los efectos de financiar las erogaciones de la Autoridad de Aguas, créase el Fondo Hidráulico, que será formado por los siguientes recursos:

- a) Los fondos que se acuerden por el Presupuesto de la provincia.
- b) el producido de la contribución especial que por mayor valor sea impuesto conforme lo establece el Art. 54 de esta ley.
- c) el producido de la contribución que por control de inundaciones fuera impuesto a los inmuebles, conforme el Art. 72 de esta ley.
- d) el beneficio que se obtenga con la venta de tierras beneficiadas por las obras.
- e) las donaciones, multas o legados.

Art. 77 - Con destino a satisfacer los servicios que preste el Estado Provincial, a través de la Dirección Provincial de Energía, se establece el Fondo de Explotación, que será formado por las sumas recaudadas en concepto de cánón de uso. Dicho Fondo será destinado al pago del mantenimiento de los servicios.

Art. 78 - El cánón a que se refiere el artículo anterior, deberá ser fijado de modo que grave en forma proporcional al uso que se efectúe y de modo tal que evite el déficit de explotación del servicio.

CAPITULO VII - DISPOSICIONES ESPECIALES.

Art. 79 - Se consideran aguas termales aquellas que por su temperatura son idóneas para fines terapéuticos en relación a la salud humana. La concesión de tales aguas por la Autoridad, sólo podrá efectuarse mediando dictamen de la autoridad sanitaria que acredite la conveniencia de su uso o aplicaciones.

Art. 80 - El uso o anuncio de aplicación de aguas públicas termales sin cumplimiento del trámite de concesión pertinente, será penado con multa de hasta cinco veces el valor del cánón de servicio de mayor valor en la Provincia.

Art. 81 - Declárase de utilidad pública y sujeta a expropiación las aguas termales privadas. La determinación de su condición de termales será efectuada por la Autoridad de Aguas, como requisito previo a la expropiación.

Art. 82 - Las modificaciones del clima, lograda mediante siembra de nubes u otros sistemas orientados a provocar lluvias artificiales, deberán ser autorizados por la Autoridad de Aguas, aún cuando se intente la mera realización de experiencias con carácter científico.

Art. 83 - Los permisos para efectuar las modificaciones de clima a que se refiere el artículo anterior, podrán concederse tanto a concesionarios de dichos servicios con fines directos de lucro, como a particulares, interesados por razones de propia producción o científicas.

Art. 84 - Los daños e intereses que puedan provocarse, en las instalaciones o propiedades de terceros, deberán ser indemnizados por los concesionarios, en cuanto pueda demostrarse la vinculación del perjuicio sufrido con el cambio de clima provocado.

Art. 85 - La venta de aguas privadas está permitido dentro del territorio de la Provincia, siempre que las condiciones sanitarias del agua no sufra alteración efectiva.

Art. 86 - La Autoridad de Aguas podrá desafectar del dominio público las aguas que sean necesarias para la bebida humana o uso doméstico, requiriéndose en los demás casos, ley de la legislatura.

Art. 87 - El transporte de aguas a que se refiere el artículo anterior podrá ser acordado a particulares, sobre la base de tarifas aprobadas por la Autoridad de Aguas. En ningún caso, podrá percibirse por el agua desafectada otros valores que los que ocasione su extracción o transporte y retribución por el servicio.

Art. 88 - La Autoridad podrá encargar a concesionarios, el almacenamiento de aguas públicas, retribuyendo el servicio mediante contraprestación adecuada.

Art. 89 - Los contratos que en tal sentido se efectúen, deberán establecer las tolerancias de volúmenes que se admitirán por evaporación o filtración y los cargos que se impondrán, cuando las tolerancias sean superadas.

Art. 90 - Los contratos de almacenamiento que se efectúen por particulares, respecto de aguas privadas, deberán ser registrados en la Autoridad de Aguas. Esta Autoridad podrá permitir en casos excepcionales, el uso de terrenos de dominio del Estado, para almacenamiento de aguas privadas.

Art. 91 - En el caso del artículo anterior, la Autoridad de Aguas impondrá al responsable del almacenamiento un cargo con destino al Fondo Hidráulico, en razón de la ocupación del espacio estatal acordado.

CAPITULO VII - CONSERVACION DEL AGUA.

Art. 92 - Los derechos sobre aguas públicas que por esta ley o el Código Rural se acuerden, imponen al concesionario la obligación de devolver los caudales no consumidos, de modo que no sean nocivos a la salud humana y aptos para nuevos usos.

Art. 93 - Los gastos necesarios para obtener el grado de pureza a que se refiere el artículo anterior, corresponderán de cuenta del concesionario.

sionario hasta tanto normalice las condiciones de devolución del agua ~~de las~~ ~~colec~~ ~~tores~~. También conforme lo establece el Art.28, la Autoridad podrá determinar para ciertas industrias el grado de infición, ~~que~~ le será permitido.

Art. 95 - Cuando el concesionario es reincidente en la devolución del agua inficionada, la Autoridad podrá, además de suspender sus derechos, aplicar una multa de hasta dos veces el valor económico de los trabajos necesarios para depurar las aguas inficionadas.

Art. 96 - La Autoridad Forestal deberá coordinar con la Autoridad de Aguas los planes de tala de bosques o reforestación que tenga en proyecto, con el propósito de proteger las fuentes y cursos de aguas, sean públicas o privadas.

Art. 97 - Los concesionarios o usuarios de aguas públicas, como también los propietarios particulares deberán enviar a la Autoridad de Aguas, copia de los planes forestales que sean enviados a la autoridad forestal.

Art. 98 - La Autoridad de Aguas podrá sugerir a la Autoridad Forestal la conveniencia de efectuar o dejar sin efecto determinados planes atendiendo a las conveniencias de la adecuada protección de las fuentes.

Art. 99 - El incumplimiento de las disposiciones adoptadas por la Autoridad Forestal, en relación a medidas dispuestas con asesoramiento de la Autoridad de Aguas, será reprimida conforme las sanciones y procedimientos que establece la ley forestal respectiva.

Art. 100 - Mientras no se encuentre en funcionamiento la Autoridad de Aguas que por la presente ley se crea, las funciones de medición e información respecto de los caudales hídricos la ejercerá la Dirección Provincial de Vialidad, correspondiendo las demás atribuciones de la Autoridad de Aguas, al Ministro de Obras Públicas.

SEGUNDA PARTEENTE

Proyecto de un Ente Provincial coordinador de las investigaciones y realizaciones sobre recursos hídricos y de carácter agropecuario; su relación con organismos Nacionales y Provinciales similares.

4.2.1. - Exposición de motivos

El territorio de la provincia de Corrientes, no alcanza a constituir por sí solo una región, en el sentido que los modernos estudios acuerdan al área geográfico-económica en el que pueda desenvolverse integralmente un proceso agropecuario. La Provincia es a todas luces integrante de un área mucho mayor que queda encerrada por los ríos Paraná y Uruguay y que de antiguo se reconoce como mesopotamia argentina.

Fuera de esta primera integración del territorio, un segundo análisis podría determinar la existencia de otras subregiones que se superponen parcialmente. Una es la que resulta denominada litoral argentino, que comprende las provincias que limitan en el río Paraná y que en función de ese río pueden recibir un trato y atención conjunta. Otra, es la sub-región aún no consolidada que forma Corrientes a través del puente de Uruguayana y su zona de influencia con el Brasil. Una última, podría constituirse con la zona de límite con Misiones, camino obligado de los productos de esa Provincia.

Pero resulta obvio señalar que estas sub-zonas, si bien presentan características diferenciadas, no alcanza a constituir un conjunto autónomo que justifique una autoridad central que evalúe y controle el uso de los recursos naturales.

Por efecto de las consideraciones que preceden debemos descartar la posibilidad de constituir un ente de efectivo gobierno de recursos, conscientes de que la falta de una base territorial suficiente, provocarían el fracaso rotundo de un organismo que por fuerza resultaría grande e inadecuado.

4.2.2. - Estructura de la Administración.

Limitado el panorama por ese motivo, debemos analizar la conveniencia de estructurar dentro de los límites característicos de la acción administrativa local, una oficina que pudiera cumplir cabalmente el propósito de evolución agropecuaria por seguido. En el régimen actual de organización de la Administración pública provincial, de tipo notamente ministerial no es dado hallar dependencias técnicas que actúen fuera de la órbita centralizada del P.E.. A más de ello, el régimen ministerial provoca una muy directa dependencia de la oficina técnica o administrativa con el quehacer del ministro, quien por el imperio de su especialidad, obra la más de las veces sin poder cubrir las áreas de trabajo que siendo de su competencia, también son vecinos a otro u otros ministerios.

Las dificultades de contacto entre las oficinas administrativas que el quehacer cotidiano incrementa, no resultan fácilmente superables. Sin embargo, la labor debe por fuerza realizarse en forma conjunta y ello ocasiona perturbaciones y demoras.

Para solucionar estas dificultades algunos países latinoamericanos han estructurado ministerios especiales de fomento, con los cuales se orienta la realización de proyectos novedosos que no encajan en principio en las formas de trabajo rutinarias de la burocracia. Tal el sistema de Perú que tiene creado el Ministerio de Fomento y Obras Públicas, Venezuela con su Ministerio de Fomento, y Chile, que tiene creada la Corporación de Fomento y Producción, dependiente del Ministerio de Economía y Comercio.

Pero la dificultad de este tipo de organización, es que tras de ellos deben establecerse fuertes agrupaciones administrativas que esterilizan el intento inicial. Por tal motivo la experiencia sudamericana -que es la más útil en nuestro caso por la comunidad de costumbres e ideas- ha ido evolucionando hacia organismos de coordinación y programación como en nuestro país, el Consejo Nacional de Desarrollo.

El riesgo es que a poco, estos mismos entes, inicialmente contruidos para obrar con la mayor agilidad, pueden transformarse por acción de su propia gestión gubernativa, en penosos engranajes que en vez de acelerar soluciones las entorpecen.

4.2.3. - Estructura del ente proyectado.

Mediante el proyecto de decreto de creación de un ente de fomento que se a compañía, se pretende mejorar los inconvenientes hasta aquí apuntados, mediante un organismo de coordinación que perfeccionará la actuación de las oficinas administrativas.

La indispensable necesidad de que el ente se desempañe a nivel ministerial hace que su organización se establezca en la órbita de la Secretaría de la Gobernación de la Provincia. A través del directorio que se proyecta, se intenta lograr la participación efectiva del sector público y privado con lo que se espera una mayor interacción, entre tales sectores, con aprovechamiento de los esfuerzos que ambas partes realizan en favor de la comunidad. En el orden funcional la exigencia de que se hagan dos reuniones como mínimo por año, atiende a lograr un efectivo pero no penoso o rutinario tratamiento de los problemas. Si el ritmo de trabajo lo exige, el Directorio deberá tener una mayor oportunidad de reunirse, pero si por el contrario la gestión queda orientada en forma suficiente, podrá encomendarse al secretario general la responsabilidad de continuar la ejecución de las resoluciones que el directorio hubiera adoptado. El resultado de los primeros meses de labor, indicarán la conveniencia de aumentar o disminuir las reuniones del Directorio.

El funcionamiento del directorio no significará la erogación de grandes sumas. El hecho de que dos de los ministros sean integrantes del mismo, al tiempo que facilita los contactos necesarios en problemas que los son comunes, no recarga la acción que deben realizar normalmente. Además, los otros representantes del sector público tienen a través del directorio la posibilidad de dar a conocer el progreso de los proyectos o planes, administrativos iniciados.

En lo que se refiere al sector que representa el interés privado, es evidente que tales entidades podrán a través de este directorio poner de manifiesto sus preocupaciones y objetivos, integrándose con la actividad del gobierno, sin cuya gestión no se concibe un resultado beneficioso, como tampoco puede entenderse un Gobierno ajeno al interés común.

En la oportunidad de ser oídos e influenciar en forma mediata sobre la actividad del gobierno, es de suponer tales representantes hallarán atractiva su participación en el ente.

Sin embargo, para no perjudicar económicamente a los representantes de tan diversos sectores, el proyecto anticipa la conveniencia de que se abone a los directores un viático por cada reunión a la que asistan. Este viático debe ser suficiente para estimular la presencia de los miembros del cuerpo. La reglamentación podrá indicar con detalle la oportunidad y monto en que debe percibirse tal retribución.

El secretario general es por lo demás el funcionario de mayor estabilidad de todo el ente. A él se le encarga la ejecución de las resoluciones del directorio y él debe poner en marcha a través de las demás oficinas del gobierno, los detalles de los programas o planes que resulten por efecto de los estudios aprobados. Con él colabora un pequeño número de empleados, que deberá proveerse con los mejores conocimientos posibles, dentro del ámbito administrativo. Su experiencia anterior en organismos similares deberá ser esencial, sobre todo en el período de organización y ajuste, en el que se estima, podrá configurarse en definitiva el ente coordinador que se pretende obtenga buenos resultados prácticos.

4.2.4. - Fuentes y antecedentes.

El proyecto en general ha sido estructurado sobre la base de la experiencia impuesta por la ley chilena N° 15.020 publicada en el Diario Oficial de la República de Chile el 27 de noviembre de 1962, en la pág. 2501. A ese lineamiento se le ha despojado de todo lo que puede entorpecer su acción. Para configurar el ente que se presenta, se ha seguido también en parte el decreto 7290/61 que creó en la Argentina el Consejo Nacional de Desarrollo. Con tales bases y con una observancia inmediata de los problemas de Corrientes se ha procedido a proyectar el decreto que sigue.

4.2.5. - Texto del proyecto.

Art. 1 - Créase el Ente de Fomento Agropecuario (EFA) como organismo destinado a coordinar las investigaciones, proyectos, programas u obras vinculadas al aprovechamiento hídrico y agropecuario, en que intervenga coordinación.

Art. 2 - El Ente estará integrado por un Directorio y un Secretario General. El Directorio estará compuesto por: el Ministro de Obras Públicas y S.P. el Ministro de Hacienda y Economía. Un representante de los agricultores y un representante de los ganaderos, designados por el P.E. a propuesta en terna de las sociedades representativas. Un representante del Banco de la Provincia. Un representante del Comercio y la Industria, designado por el P.E. a propuesta en terna de las entidades representativas. La Presidencia del Ente corresponderá al Presidente del Directorio, que sólo podrán ser los ministros integrantes del mismo, quienes se sucederán alternativamente una vez por año.

Art. 3 - El Secretario General será designado por el P.E.. El nombramiento deberá m caer en persona experta en materia hídrica y agropecuaria con probado conocimiento administrativo. El Secretario General deberá asistir y ejecutar los acuerdos del Directorio, que podrá delegar en él la representación del Ente, a todos los efectos.. Si no media expresa delegación, el Directorio representa al Ente, a través de su Presidente.

Art. 4 - Las funciones del Ente, a los efectos de las tareas de coordinación a que se hace referencia en el Art. 1°, serán :

- a) Coordinar la acción de los diversos organismos, instituciones o empresas del sector público e incluso privado si voluntariamente se obtuviere su concurso, para el debido cumplimiento de las tareas de desarrollo agropecuario.
- b) Promover y realizar estudios, investigaciones, proyectos y programas que atendán al aprovechamiento hidráulico y al desarrollo agropecuario.
- c) Efectuar estudios y promover la aplicación de mejores sistemas de distribución y venta de la tierra fiscal, proyectando su correcto escurrimiento o desagüe.
- d) Propiciar la intervención de la Provincia en los organismos o niveles nacionales o internacionales, cuando por efecto de acuerdos o tratados de carácter internacional, los recursos naturales de la provincia pueden verse afectados o regulados inadecuadamente. En igual modo podrá sugerir la conveniencia de participar en el planeamiento de aprovechamientos beneficiosos al interés local.
- e) Estudiar y proponer normas especiales de asistencia técnica y crediticia que deberá prestarse a los productores agropecuarios.
- f) Informar al Gobernador de la Provincia acerca de la conveniencia de la expropiación de tierras, que en razón de obras hidráulicas u otras de contenido agropecuario sea menester efectuar.
- g) Promover y revisar los convenios de colonización que la Provincia celebre con entidades internacionales o extranjeras, como también con otros Estados.

Art. 5 - El Directorio tiene las siguientes atribuciones:

- a) Contratar o autorizar al Secretario General para que contrate, con o sin el procedimiento de la licitación, determinados trabajos, estudios, investigaciones y tareas con profesionales o expertos, empresas o instituciones nacionales, internacionales y extranjeras. Cuando se abandone el procedimiento de la licitación, deberá fundarse expresamente los motivos determinantes, debiendo en el caso acordarse la adjudicación a persona o empresa de reconocida experiencia y capacidad.
- b) Dictar su reglamento interno, el que deberá ser aprobado por el P.E..
- c) Designar el personal técnico y administrativo, permanente, necesario para el desenvolvimiento de sus actividades, hasta el máximo de seis personas en total. En el caso de requerirse un número mayor, deberá proponerse su designación al P.E. quien la efectuará en el caso de que estime procedente el pedido, conforme con la documentación justificante que se le envíe.
- d) Coordinará las actividades de investigación o estudio que se efectúe por otros organismos provinciales, dentro del marco de sus objetivos, a cuyos efectos hará saber con suficiente anticipación los alcances de su intervención o su conformidad con las tareas a realizarse. En el caso que los trabajos o estudios a efectuarse por oficinas de la Administración no se estimen convenientes por el Directorio deberá ésta limitarse a comunicar su dependencia al Gobernador.

pañando los fundamentos técnicos pertinentes, que estimare convenientes.

Art. 6 - Los Directores durarán cuatro años en sus funciones. Quienes ejercen tales funciones en razón de sus cargos no podrán ser reelegidos una vez cesados en ellos. Igualmente, si cesaren en sus cargos públicos cesarán en el Ente.

Art. 7 - El Directorio deberá reunirse por lo menos dos veces en el año, siendo optativo el efectuar reuniones más frecuentes. Por cada reunión a la que asistan percibirán un viático, el que se establecerá por Decreto.

Art. 8 - El Secretario General percibirá un sueldo acorde con la importancia de su cargo, siendo obligatoria la concurrencia a la reunión de Directorio, sin el beneficio de viático alguno por tal motivo. La conducta y el desempeño del Secretario General serán Juzgados por el Directorio, quien podrá proponer al P.E. el cese de sus funciones, sin perjuicio de las atribuciones propias del Ejecutivo.

Art. 9 - De forma.